



GRUPO DE TRABAJO 16

LA RELACIÓN SABER Y EXPERIENCIA COMO MODO DE INTERROGAR LAS “NUEVAS” FORMAS DE TRABAJO Y DE ORGANIZACIÓN

TALLER COLECTIVO SEPTESA - IDAES (UNSAM)

COORDINADORES

Anaïs Roig

Cintia Cavallo

Waldemar Cubilla

Julieta del Campo Castellano

FUNDAMENTACIÓN

La llamada crisis del régimen de acumulación fordista y la evolución del capitalismo hacia una forma globalizada, financiarizada y de “tecnología-intensiva” supusieron transformaciones societales, económicas y políticas profundas que siguen desafiando, de modo específico, la aplicabilidad de la ciencia social en países periféricos, como el nuestro. Sin pretensión de abarcar dicha totalidad, nuestra inquietud nace de considerar algunas limitaciones prácticas de las categorías con las que tradicionalmente se interpreta el mundo productivo. Así, esta mesa se orienta a discutir procesos de trabajo humano directo, modos de organización de vida en sociedad y experiencia productiva, desde un particular abordaje epistemológico y metodológico, con la aspiración de generar renovadas herramientas de lectura de la realidad que nos interpela. A grandes rasgos, la idea de abordar epistemológicamente ámbitos heterogéneos de trabajo radica, por un lado, en la reivindicación de un principio de igualdad de saberes y, por el otro, en el propósito de reconocer y reconstruir aquellos “saberes experiencia” que trascienden los ámbitos del trabajo asalariado.

En línea con la edición anterior de las jornadas de jóvenes investigadores, la apuesta de esta mesa reside, en suma, en actualizar e interrogar sociológicamente los modos conflictivos de valuar e interpretar un saber hacer que se pretenda colectivo y cooperante, así como los mecanismos de expropiación de dichos saberes; las “nuevas” formas de gerenciamiento y gestión –ya sea en la empresa capitalista privada o en otras formas de organizar producción de valor–; preguntarse por las modalidades de adaptación y resistencia de los actores frente a las transformaciones en curso en el mundo del trabajo. Nuestros interrogantes también se ven signados por preocupaciones en torno a las mutaciones subyacentes de la cultura del trabajo y los modos de estabilizar decisiones legítimas de la experiencia colectiva, en un intento por indagar, entre otras cosas, tecnologías de control y monitoreo, cultura tecnológica y maneras de hacer de los trabajadores orientados a la resolución de problemas.

En este marco, esta mesa invita a presentar trabajos sobre temas relacionados con el saber y la experiencia común que aborden algunos de los tópicos señalados arriba, independientemente del enfoque teórico adoptado.

ÍNDICE DE TRABAJOS:

Micaela Amancay Antonini (IDAES-UNSAM)

“En el territorio los tiempos son otros”. Una reconstrucción “desde abajo” del programa
“Secundaria con Oficios” (General San Martín, Buenos Aires).....4

Cintia Cavallo (IDAES-UNSAM)

Recuperar e integrar el saber propio y de otros. Gestión común ante implicancias de
conflictividad jurídica y deuda popular.....22

Maximiliano Ledesma (IDAES-UNSAM) La inspección del trabajo: escenas del mundo
laboral

reciente.....38

“En el territorio los tiempos son otros”. Una reconstrucción “desde abajo” del programa “Secundaria con Oficios” (General San Martín, Buenos Aires)

Micaela Amancay Antonini

Resumen

La presente ponencia intenta ofrecer una reflexión inicial a partir de un proceso de investigación-acción-participativa enmarcado en la implementación del Programa “Secundaria con Oficios” que estamos llevando a cabo con grupos de referentes y miembros de organizaciones populares del Área Reconquista, en el partido de General San Martín. Dicho programa articula una labor conjunta de la Dirección de Educación de Adultos y la Dirección de Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El objetivo explícito de estas estrategias intersectoriales involucra la aplicación de políticas educativas “*en territorio*” dirigidas a sujetos adultos que no han podido concluir sus estudios en los plazos formales, sumándoles a su vez la posibilidad de una capacitación formal en un oficio.

Sabemos que afirmar y constatar la existencia de “desajustes” entre el diseño de una política pública o un programa social y su aplicación efectiva resulta tan estéril como trivial. Más productivo resulta analizar de qué manera diversos actores colectivos utilizan estos intersticios no sólo para trascender las limitaciones del programa sino también para producir una serie de operaciones alineadas con sus propios intereses. Nuestra ponencia procurará, en ese sentido, mostrar de qué manera estos actores reconstruyen “desde abajo” el programa a través de sus “saberes locales” producto de la experiencia, al tiempo que obtienen beneficios no previstos, tales como una mejor inserción territorial, una acumulación del su capital político, una mayor legitimidad en las disputas políticas locales o bien un fortalecimiento en sus propias organizaciones interna, a la vez que producen conjuntamente un espacio social particular: un territorio educativo.

Palabras Clave:

Programas sociales, Organizaciones Territoriales, Territorio, Agencia

Introducción

La importancia que tiene la educación en las sociedades actuales es innegable. Incluso en nuestro país pese las críticas y los grandes problemas que presenta la escuela actual la gran mayoría de las personas le atribuyen a la educación la capacidad de transmitir el legado cultural a las nuevas generaciones, aportar al crecimiento de las naciones y promover la movilidad social de las personas. La educación aparece en las representaciones de los sujetos como el antídoto contra la desigualdad. Tal como señala Gabriel Kessler (2014), aún se mantiene firme como ideal la finalización de los estudios medios como forma de “ser alguien en la vida” y tener mejores posibilidades de obtener un trabajo digno” En este sentido, la educación de jóvenes y adultos ocupa un lugar central tanto en la agenda estatal como en los repertorios morales que movilizan los actores en determinadas circunstancias.

En el marco de los procesos de transformación económica, social y política que tuvieron lugar en nuestro país a fines de los noventa y principios de los años dos mil diversas organizaciones sociales, y movimientos populares, comenzaron a reconocer el componente pedagógico involucrado en sus prácticas cotidianas y han avanzado en la generación y/o recreación de estrategias educativas. Pero como veremos en el desarrollo de este trabajo la invocación a la educación, por parte de los actores, va más allá de lo exclusivamente pedagógico. En tanto valor moral la educación forma parte de un repertorio de acción bastante amplio que va desde el surgimiento de los Bachilleratos populares -y sus postulados de las pedagogías críticas-, la implementación de políticas públicas -y sus lógicas de inclusión educativa-, hasta la declaración de una zona marginal como territorio educativo -y la pretensión de un reconocimiento social hacia ciertos “saberes locales”-.

La presente ponencia intenta ofrecer una reflexión inicial a partir de un proceso de investigación-acción-participativa¹ enmarcado en la implementación del Programa

¹ El desarrollo de este trabajo se basa en una serie de reflexiones iniciales a partir de un proceso de investigación-acción-participativa (IAP) (legado del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda Su propuesta de Investigación-Acción Participativa plantea que la universidad no podía estar ajena a las

educativo “Secundaria con Oficios” que estamos llevando a cabo con grupos de referentes y miembros de organizaciones populares del Área Reconquista (AR), en el partido de General San Martín. El eje que marcará nuestras reflexiones involucrará una pregunta en clave comparada acerca de los modos de interpretación, valorización, reconocimiento, usos, etc. de ciertos “saberes locales” -producto de la experiencia social- que se pretenden colectivos y co-operantes en el marco de un territorio dado. Para ello repararemos, por un lado, en el tipo de relación que en los últimos años este grupo de referentes han entablado con la Universidad de San Martín (UNSAM) y por el otro, en el vínculo que han establecido con determinados agentes estatales para la implementación de un programa educativo en el territorio. Puesto que, nos interesa recuperar la noción de *experiencia* -en tanto recurso movilizad y apropiado por los actores en ciertas circunstancias- para analizar cuáles son sus potencialidades y límites en la lucha por el reconocimiento de los “saberes locales”.

El programa “Secundaria con oficios” y el rol del tutor socio-laboral como nexo con el territorio.

“La Educación es el camino para construir una Provincia más justa”

En el año 2016 la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, presentó el Programa “Secundaria con Oficios. Una propuesta dirigida a jóvenes y adultos que impulsa la articulación de la secundaria con el aprendizaje de un oficio. Otorgando certificados en las áreas de la construcción, mecánica, plástico, energía, administración, gastronomía y hotelería entre otros oficios. Inicialmente el programa se había llevado a cabo en el partido La Plata y tras una óptima recepción e implementación comenzó a replicarse dicha experiencia en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Hacia mediados del año 2018 la Dirección de Educación de Adultos (DEA) convocó a un grupo de miembros del programa –quienes ya habían comenzado su implementación a principio de año en Área Reconquista- a una Jornada de Capacitación. El encuentro se llevó a cabo en el Partido de Gral. San Martín y participaron los directivos a cargo del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) y del Centro de Formación Profesional (CFP), el inspector de la Dirección de Adultos del distrito y los tutores socio-laborales a cargo de las –por aquel entonces- quince sedes donde se desarrollarían las comisiones previstas para el

apremiantes problemáticas sociales. De modo que, generó una metodología capaz de integrar conocimiento, compromiso y transformación como una opción válida para investigadores y comunidades.

ciclo lectivo 2018. La jornada giró en torno a tres ejes: el propósito general del programa, el rol del tutor socio-laboral y la explicación de la estructura organizativa del programa. A los fines de este trabajo solo nos concentraremos en los dos primeros ejes de la reunión.

Durante la primer parte de la capacitación se trabajó sobre el primer eje y consistió fundamentalmente en una exposición de los coordinadores quienes dejaron en claro que el objetivo del programa es lograr que los jóvenes y adultos que no completaron su escolaridad formal lo hagan vinculando su educación al mundo del trabajo, a partir del aprendizaje de un oficio². En términos generales, la lógica subyace a este programa podrían ser resumidos en la siguiente premisa. Si bien la formación secundaria de jóvenes y adultos por una parte ha logrado posibilitar el acceso a niveles superiores de educación a sus egresados, por otra parte sigue presentando una gran desarticulación con el mercado laboral formal. Razón por la cual la tarea educativa del programa se enmarca en el desarrollo de jóvenes y adultos a quienes se les otorgará una serie de competencias y aptitudes necesarias para una plena participación ciudadana, y con perspectivas hacia el trabajo formal. Según el equipo de coordinadores el desafío que asumen desde la política educativa actual es el de saldar viejas deudas entre educación y trabajo. *“Estamos convencidos que, es en la interacción del trabajo conjunto entre educación secundaria y formación profesional, es donde se logrará articular e integrar culturalmente”*, repetirán en varias ocasiones los coordinadores.

Para que los objetivos generales- explicados en la primer parte de la reunión- pudieran cumplirse era esencial que el grupo de tutores allí presentes comprendieran qué se esperaba de ellos. De modo que, ya en la segunda parte de la reunión el equipo de coordinadores se enfocó en la figura del tutor socio – laboral. Al finalizar la ronda de presentación de los tutores quedaron de manifiesto dos aspectos del grupo: la mayoría contaba con una amplia experiencia en trabajo territorial – ya sea desde el trabajo en la educación popular hasta el trabajo con cooperativas- y muchos de ellos eran oriundos de la zona de José León Suárez (San Martín). Dentro de los requisitos formales para el puesto de tutor socio-laboral solo figuran: ser mayor de 21 años, sexo indistinto, tener

² El egresado del programa recibe su certificación del nivel educativo secundario y por cada año la correspondiente a la especialidad de formación profesional aprobada.

como mínimo secundario completo, conocimientos de informática y contar como mínimo con experiencia en: educación para adultos, docente, instructor, psicopedagogo, psicólogo social, miembro en proyectos sociales- comunales, etc. En ninguna parte figura como requisito formal que el tutor socio-laboral resida en las inmediaciones a la sede donde desarrollará su labor.

Respecto a las tareas que debe desempeñar un tutor socio-laboral los encargados de la jornada hicieron un énfasis particular en tres temas: la difusión del programa, la convocatoria y al sostenimiento de la matrícula. En cuanto a los dos primeros temas, si bien el programa cuenta con una serie de estrategias³ alternativas, es gracias al conocimiento que el tutor tiene del barrio y sus necesidades que puede conseguirse una matrícula óptima. Así pues el tutor resulta ser una figura clave ya que su labor diaria implica, participar de la orientación e instancias de inscripción de los alumnos; la conformación del grupo; el seguimiento e integración de la matrícula; la inclusión socio educativa y la posterior inserción laboral de los egresados⁴. Así como ser el nexo en la comunicación entre el grupo de estudiantes con los docentes y las autoridades de cada institución educativa.

Otra de sus tareas principales es la de realizar el seguimiento de asistencias y el apoyo a los estudiantes, ya que puede tratarse de jóvenes y adultos que se hayan reinsertado en el sistema educativo luego de un largo período de ausencia o personas no acostumbradas a esta modalidad de escolarización en nexo con el aprendizaje de un oficio). Esta función es muy importante en lo relativo al acompañamiento durante el proceso de formación de los destinatarios favoreciendo su permanencia en el ámbito educativo; interviniendo ante las dificultades que puedan interrumpir la continuidad del desarrollo de la trayectoria educativa. La duración del proceso de certificación para el nivel educativo dura tres años. La gran mayoría de los alumnos trabajan (aunque de modo irregular y esporádico) y muchos tienen hijos, lo que vuelve compleja su

³ Las estrategias de difusión puesta por la Dirección de Educación de Adultos de la provincia de Buenos Aires son: Ventanilla Única Digital(VUD) que es una plataforma en la cual los interesados pueden ingresar, seleccionar su localidad y elegir la oferta educativa presente en ella, entre las cuales se encuentra el programa Secundaria con oficios. Bocas Únicas Distritales (BUD) que son centros de atención locales, con horarios fijos de atención donde pueden acercarse todos los jóvenes mayores de 18 años y adultos para ser orientados respecto a las distintas ofertas que la Dirección de Educación de Adultos desarrolla en su distrito de residencia.

⁴ Esto aún no se ha comenzado a trabajar dado que la primera cohorte del programa en el partido de San Martín recién se encuentra cursando el segundo año de los tres que conlleva su finalización.

asistencia a clases. Aun así han encontrado en el programa una alternativa para poder acreditar el nivel medio y ellos hacen uso de ella.

La mayor dificultad a la que debe hacer frente el tutor a la “baja de la matrícula” de la sede que tiene a cargo. Como ya hemos advertido en la introducción, las reflexiones que sostienen esta ponencia forman parte de un trabajo de prospección que hemos llevado a cabo durante los primeros meses de implementación del programa en el Área Reconquista. Como producto de nuestro trabajo de campo -en varias de las sedes que conforman la primera y segunda cohorte de dicho programa- hemos identificado en principio tres posibles causantes. Según los diversos estudios de la población participante en el Programa “Secundaria con Oficio” se ha identificado en primer lugar que la gran mayoría de los estudiantes cuenta con dificultades para organizar los horarios de sus “*changas*”⁵ en función de los horarios fijos que inicialmente han elegido para su trayecto educativo. Al dar una mayor preponderancia a la búsqueda de empleo-y a su posterior mantenimiento- el desarrollo de la cursada se hace mucho más irregular, al punto que el estudiante llega a abandonar su grupo de estudio. Otro de los factores que usualmente ocasiona inconvenientes para sostener el número de la matrícula se vincula con los estudiantes que a su vez figuran como titulares del Programa *Hacemos futuros*⁶. Las disputas/negociaciones que estos tienen con los referentes de las cooperativas a las que pertenecen tienen como eje fundamental el cambio en los requisitos obligatorios para seguir cobrando el incentivo mensual. Al sustituirse la típica “contraprestación”⁷ por la terminalidad de los estudios primarios y secundarios y la capacitación en un oficio, se producen una serie de tensiones entre aquellos que buscan hacerse de herramientas para terminar sus estudios y capacitarse en un oficio y aquellos que se resisten a la nueva modalidad y pretenden simplemente

⁵ “Changas” refiere en Argentina a trabajos informales, esporádicos e incidentales, de corta duración.

⁶ A partir de febrero de 2018 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió aglutinar a los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen (actual Hacemos Futuro Juntas) y Desde el Barrio bajo un único programa: Hacemos Futuro. La reformulación busca que todos los participantes cumplan con tres contraprestaciones: actualización de datos en ANSES, la obligatoriedad de la terminalidad educativa y formación integral. A fin de percibir un beneficio económico. Hacemos Futuro fomenta el desarrollo de las personas para que tengan más oportunidades de insertarse en el mundo del trabajo. El programa les brinda herramientas para que los participantes puedan capacitarse y mejorar sus condiciones de empleabilidad.

⁷ El objetivo central del programa anterior “Argentina Trabaja” era la creación de oportunidades de inclusión socio-laboral a través de la creación de puestos de trabajo, fomentando la organización cooperativa y el desarrollo de capacidades desde una perspectiva multidimensional e integral de derechos (Gradin y Tiranti, 2012)

potenciar los principios de la economía social y profundizar estrategias territoriales⁸. Por último, se identifican un conjunto de emergentes sociales que frecuentemente afectan la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes; tales como: violencia de género, consumo problemático de drogas, familiares en conflictos con la ley, madres solteras que no cuentan con el apoyo de terceros para el cuidado de sus hijos. A este conjunto de desafíos visibles en la cotidianidad se le suma otro que en principio parecería menos perceptible pero no por ello menos importante en virtud de sostener la matrícula de las sedes.

Todo este proceso educativo significa para los estudiantes de los sectores populares una inversión de largo plazo y muchos lo identifican –en un primer momento- como un objetivo muy difícil de cumplir. Lograr que algunos estudiantes –sobre todos los adultos que deben estudiar para cumplir con los requisitos del programa Hacemos Futuro- puedan proyectar los resultados de su incursión en la educación secundaria y en el taller de un oficio en un largo plazo y no desde la inmediatez es otro de los desafíos en la labor del tutor. En términos de Denis Merklen (2000) sería pasar de la “lógica del cazador” a la “lógica del agricultor”⁹.

Ante personas que incursionan por primera vez en el “trabajo territorial” la primera explicación suele ser del tipo: “*Acá en el barrio los tiempos son otros*” y el tutor -en tanto habitante de ese barrio- lo sabe y por ello puede articular entre las expectativas de quienes diseñaron el programa y las condiciones objetivas de los estudiantes para poder dar continuidad a sus cursadas. Así pues, estos sujetos involucrados en la implementación territorial del programa pueden ser pensado como intérpretes particulares con la capacidad de negociar contenidos, procesos y normas tanto escolares (Rockwell, 1987) como institucionales. Y aunque los tutores tienen la ventaja de tener un conocimiento más concreto del estudiantado dado su cercanía con el territorio no habría una apropiación del programa que los impulse a proponer acciones que fortalezcan y mejoren la implementación del programa. Por lo pronto solo hemos

⁸ Para profundizar sobre las transformaciones que atravesaron estos programas a partir de su unificación sugiero una lectura del Informe N° 11 del Observatorio sobre Políticas Públicas y Reforma Estructural “*Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo*” y el “*Ellas Hacen*” al “*Hacemos Futuro*”. *¿Integralidad o desintegración de la función social del Estado?* (Cynthia Ferrari Mango, Julieta Campana, 2018) <http://politicaspUBLICAS.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2018/07/Informe-OPPRE-N%C2%B0-11.pdf>

⁹ La primera lógica marca la contingencia y la falta de soportes que los sectores populares tienen en su vida diaria, a diferencia de la segunda lógica que da cuenta de la vida planificada y estructurada de los sectores medios.

identificado una relación instrumental. La mayor parte de las veces el uso que los tutores socio-laborales hacen de sus “saberes -experiencia” en la reconstrucción “desde abajo” del programa no trascendería el ámbito del trabajo asalariado.

La declaración del Área Reconquista como “Territorio Educativo”

“No es fácil decirle a un pibe ahora deja los fierros y agarra un libro”

Vastos son los estudios sociales que han demostrado como la historia del país desde la última dictadura cívico-militar hasta la crisis del 2001 estuvo signada por significativas transformaciones en la estructura productiva, en las formas de regulación estatal, en la dinámica del mercado de trabajo y en las políticas sociales que llevaron a la Argentina a experimentar una reorganización del conjunto de su estructura social. Ciertamente, ha sido la década de 1990- y su correlato en la crisis del 2001- uno de los momentos más crítico del país dado su impacto en las condiciones de vida de la población¹⁰. El aumento del desempleo -y el deterioro de la calidad del empleo existente- junto con el crecimiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades registradas entre trabajadores de diferentes sectores y calificaciones y el empeoramiento de la distribución del ingreso constituyeron los rasgos más importantes del período. Para el caso de determinadas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la situación de pobreza y marginalidad preexistente se agudizó aún más dando lugar a la emergencia de nuevas formas de organización popular y de prácticas políticas con fuerte raigambre territorial. Distintos estudios sociales coinciden que ante ese proceso de empobrecimiento y de desafiliación fueron principalmente los sectores populares quienes hallaron en el barrio un refugio, capaz de operar tanto como un lugar de repliegue como de inscripción colectiva. Identificando este proceso como la principal respuesta de los sectores populares al vacío dejado por las instituciones y la falta de trabajo. Ahora bien, si las transformaciones hacia fines de los noventa significaron una profunda transformación estructural –principalmente para los sectores populares- la crisis de 2001 marcó un antes y un después en la configuración social, política y económica de nuestro país.

¹⁰ Como consecuencia tuvo lugar una drástica disminución de los niveles de empleo formal y la pérdida de derechos laborales, un aumento de los niveles de subempleo y desempleo, y una creciente pauperización y deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Como correlato, estos años fueron testigos de la crisis de las identidades sociales y políticas tradicionales

Como es sabido en los años posteriores a los sucesos de diciembre de 2001 emergieron en el escenario social y político nuevas fuerzas de organización y participación identificándose un fortalecimiento de algunas instituciones y movimientos sociales ya existentes. Al respecto varios de nuestros interlocutores del Área Reconquista sostienen que: *“en el barrio la organización popular surge como alternativa a una ausencia del Estado”*, *“La miseria empuja a la participación, porque para ganarse la vida hay que moverse, hay que organizarse”*.

Hacia mediados del año 2011 -por poner una fecha hasta cierto punto inexacta- surge La Mesa Reconquista, un colectivo de organizaciones sociales y populares - integrada por representantes de asociaciones barriales, bibliotecas y bachilleratos populares, centros culturales, jardines comunitarios, empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, órdenes religiosas, iglesias y de la Universidad Nacional de San Martín- como un espacio de encuentro, reflexión y acción. Dentro del cual participan varias de las organizaciones populares con las cuales hemos iniciado nuestro trabajo de campo. Así pues, asumiéndose como un colectivo de organizaciones populares que han compartido situaciones críticas (hambre, desempleo, delincuencia, etc.) y experiencias similares durante la profundización de la crisis social del país los actores comienzan a generar una nueva subjetividad sobre la base de ciertas experiencias. Los miembros de “La Mesa” han consolidado una mirada en común respecto a los temas esenciales sobre los cuales deciden trabajar día a día para poder transformar condiciones de vida y de trabajo de la comunidad del Área Reconquista: El Reciclado y el Medio Ambiente; Trabajo; Justicia y Hábitat; y Territorio Educativo

Este breve recorrido histórico que acabamos de presentar simplemente busca situar al lector en el contexto histórico en cual surgieron muchas de las organizaciones con las que hemos comenzado nuestro trabajo de investigación-acción-participación. La gran mayoría de las sedes¹¹ del programa “Secundaria con Oficio” pertenecientes a la región de San Martín tienen su funcionamiento en organizaciones sociales emplazadas alrededor de la cuenca baja del río Reconquista, más precisamente en la zona denominada Área Reconquista¹² (AR). Esta se encuentra ubicada en el extremo norte

¹¹ Las sedes pueden ser en edificios escolares u otro tipo de instituciones tales como clubes, organizaciones sociales y políticas, sociedades de fomento, Centros de Integración Comunitaria (CIC), radios comunitarias, bibliotecas populares, comedores, asociaciones civiles, iglesias, escuelas.

¹² Esta cuenca, donde habitan más de 4.200.000 personas, es una de las más contaminadas del país, especialmente cuando llega al noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, se aloja el

del Partido y se caracteriza por ser una de las zonas más postergadas y marginales. De modo que, como es posible imaginar, la zona donde se encuentran las sedes del programa educativo Secundaria con Oficio no logró escapar a las transformaciones sociales que detallamos antes. Incluso, muchas de las problemáticas socio-económicas y políticas al interior de los sectores populares que surgieron durante los noventa aún hoy –con ciertos matices y variaciones propios de la coyuntura actual- siguen presente en la región.

Más allá de lo planteado por la literatura especializada sobre las transformaciones sociales de los últimos años y el consecuente repliegue territorial que vivieron los sectores populares a finales de la década de los noventa, pensar la relación de las personas con el territorio no resulta ser una tarea tan fácil, por lo menos a primera vista. Cuando abordamos temas que se vinculan con el espacio resulta útil recurrir a la obra de Georg Simmel (1986), quien sostenía que el espacio por sí mismo no produce efecto alguno en las relaciones sociales. Sino que, por el contrario, cuando dos personas entran en acción recíproca, el espacio que existe entre ellas aparece lleno y animado. Vemos entonces, desde esta perspectiva sociológica propuesta por Simmel, que son los vínculos y las interacciones sociales los que le dan sentido al espacio. Sobre la base de esta premisa, y volviendo a nuestro caso estudio, podemos advertir que los referentes y miembros de organizaciones populares de “La Mesa” piensan su relación con el territorio en base a dos experiencias puntuales: la carcelaria¹³ y la del “cirujeo”. *Acá en el barrio creces con dos opciones de vida: la cárcel o el basural*”, afirman varios de los habitantes del Área Reconquista. Observaciones de este tipo no son casuales si se repara en la cercanía del El Complejo Penal N°48 de San Martín (ubicado en Camino del Buen Ayre, en la localidad de José León Suárez) y la cercanía con el predio -el complejo Norte III - de la empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)¹⁴ que se encuentra ubicado sobre el camino del Buen

basural a cielo abierto más grande de la Argentina (el CEAMSE) que, a la vez, es la fuente de subsistencia de buena parte de las familias que habitan dicha área.

¹³ Hay dos procesos y fenómenos significativos en estos últimos veinte años que de alguna manera forma parte del imaginario que se suele tener sobre los barrios populares: la cárcel y la violencia. La cárcel es hoy puede ser pensada como una institución de la vida cotidiana de los pobres. Un tercio de los alumnos del lugar que llevamos a cabo nuestro trabajo de campo tiene un familiar más o menos cercano que está preso, o que acaba de salir de la cárcel, o que está siendo procesado para entrar.

¹⁴ Empresa pública creada en el año para realizar la gestión integral de los Residuos sólidos urbanos del AMBA. La experiencia del “basural” y el “cirujeo” se encuentra cristalizada por una organización comunitaria cuyos miembros viven y trabajan en torno al relleno sanitario del CEAMSE, que recibe los residuos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La Organización 8 de mayo a través de la Cooperativa Bella Flor gestiona un modelo de Planta Social de Trabajo en la que alrededor de 80

Ayre y es el último paso en la cadena del circuito de los residuos sólidos urbanos. De modo que ambas experiencias resultan tan influyentes en el Área Reconquista

Habitualmente, para la gran mayoría de los habitantes del Área Reconquista el “barrio” se les presenta principalmente como un escenario carente de posibilidades para “salir adelante”. En cambio, para “otros” que no vive allí la zona se les presentada como violenta, insegura y empobrecida. De este modo, el “fondo” del partido de General San Martín se presenta para esos “otros” como un “territorio estigmatizado¹⁵”. Aquí la estigmatización funciona como discriminación estructural en tanto acumulación de desventajas (peores servicios, falta de inversión) a lo largo del tiempo impactando negativamente en el capital físico y financiero del territorio (menor valor de las casas y los problemas de mantenimiento, el limitado acceso al crédito por razones de domicilio, etc.). Otra de las consecuencias de dicha estigmatización tiene implicancias en el capital simbólico. Según las explicaciones de nuestros propios interlocutores la “mala fama” del barrio erosiona la respetabilidad, la honorabilidad y muchas veces la “voz” de sus habitantes. Sin embargo, quienes componen “La Mesa” reconocen que: *“En el barrio hay droga, hay robos, tenemos narcos pero no somos solo eso. También hay cultura, hay educación y hay un montón de saberes que es necesario rescatar”*. Puesto en estos términos a la idea de un “territorio estigmatizado” nuestros interlocutores le contraponen la idea de un “territorio educativo”, la cual funcionaría en determinadas circunstancias como un potencial contrapeso a la “mala reputación” del territorio.

De las diversas conversaciones que hemos entablado durante nuestro trabajo de campo hemos identificado como la pobreza, incluso en casos muy duros, no disuelve la conciencia del ciudadano, la demanda de ser reconocidos como sujetos de derecho y la demanda del acceso a la educación. Y aunque nuestros interlocutores comparte la idea desde la opinión pública la escuela se presenta hoy día a como un “desastre”, “caduca”, “obsoleta”, etc. muchos sostienen que: *“la educación pública para un pibe de villa es la posibilidad de un cambio de vida”*. En ese sentido el cruce entre la cárcel el basural y el territorio, al que ya hemos hecho mención, hace algunos años que se

personas separan y clasifican residuos para su recuperación y reciclaje dentro del relleno. La misma surgió como tal en el año 1998 (el 8 de mayo de ese año es la fecha en que se tomaron los terrenos para la construcción del barrio frente al basural); desde entonces manejan un centro comunitario con un comedor y diversos talleres y actividades para los vecinos.

¹⁵ En cada partido hay una zona más estigmatizada y cuando uno se adentra en esas zonas la estigmatización se va corriendo hacia las zonas estigmatizadas dentro de él. Así pues, el estigma general se reproduce en pequeña escala.

encuentra mediado por la presencia de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en “*aliado estratégico*” para el desarrollo del eje “territorio educativo¹⁶”.

A principios del año 2019, la UNSAM concretó la declaración del partido de General San Martín como Territorio Educativo. De esta manera – y como resultado del trabajo acumulado por años- se propuso reconocer, valorizar y profundizar las experiencias de trabajo, formación, organización y producción de conocimiento llevadas a cabo en conjunto con diversas organizaciones sociales y civiles de San Martín, especialmente aquellas que se encuentran ubicadas en la denominada Área Reconquista. El vínculo entre la Universidad y el territorio¹⁷ ha estado atravesado desde sus inicios por la lógica de una construcción colectiva en la que “*saberes populares*” y “*saberes académicos*¹⁸” se funden agregando valor a la vida universitaria y a la vida de la comunidad, basada en un espíritu de igualdad y complementariedad de saberes.

Escenarios para el desarrollo de un Territorio Educativos

En los dos apartados anteriores hemos procurado mostrar, de un modo muy sintético¹⁹, dos escenarios en los cuales los actores despliegan una serie de estrategias a fin de obtener, por parte de otros, el reconocimiento de sus experiencias²⁰ sociales en tanto recurso necesario para una óptima intervención territorial. Uno es la relación del grupo de tutores socio-laborales con agentes del programa Secundaria con Oficios y el otro el vínculo de los referentes de La Mesa Reconquista con la Universidad de San Martín. En ambos casos la educación pública aparece como denominador común, a la hora de pensar la reformulación colectiva del territorio. Ahora bien ¿Qué escenario se presenta propicio para dicha reformulación?

¹⁶ En el año 2008 se crea el Centro Universitario San Martín (CUSAM) ubicado en la Unidad Penal Nro. 48 de José León Suárez, un espacio de formación superior para aquellos sectores sociales históricamente excluidos del derecho a la educación, al que asisten tanto personas privadas de la libertad como agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Realizado un aporte innovador en materia pedagógica y de seguridad. En el año 2012 un equipo de investigadores de la UNSAM realizó un trabajo de diagnóstico y asesoría en conjunto con trabajadores locales de reciclado de residuos pertenecientes a nueve plantas sociales que realizan su labor en el CEAMSE. El proceso redundó en la conquista de un piso salarial en reconocimiento a su saber/labor/valor, la denominada “conquista de la tonelada”.

¹⁷ Desde su fundación en 1992, la UNSAM se propuso una convergencia con el territorio y sus experiencias.

¹⁸ Por el momento ambas categorías solo serán presentadas en tanto categorías nativas.

¹⁹ A riegos de caer en reiteraciones le recordamos al lector que nuestro trabajo de campo aun se encuentra en sus etapas iniciales.

²⁰ Tomando los aportes de los estudios culturales empleamos el concepto de “experiencia” para referirnos a las formas como son vividas las relaciones y conflictos sociales, “dónde y cómo la gente experimenta sus condiciones de vida, las define y responde a ellas” (Hall, 1994:34).

Inicialmente, para el caso de la relación entre los actores territoriales y los agentes del programa educativo asumíamos que la usual existencia de “desajustes” entre el diseño de una política pública -o un programa social- y su aplicación podrían llegar a ser utilidad para los actores al dar cierto margen de acción. No solo para trascender las limitaciones del programa y optimizarlo, sino también para la obtención de beneficios no previstos que les permitiesen producir una serie de operaciones alineadas con sus propios intereses. Al poco tiempo de haber iniciado nuestro trabajo de campo pudimos constatar que efectivamente los tutores socio-laborales hacían uso de sus “saberes locales” -producto de la experiencia- para la reconstrucción “desde abajo” del programa, al tiempo que mejoraban su inserción territorial, en algunos casos acumulaba capital político, obtenían mayor legitimidad en las disputas políticas locales o bien fortalecían sus propias organizaciones interna.

A los ojos de un observador poco familiarizado con la historia y la lógica que subyace en las actividades y proyectos comunitarios impulsados por La Mesa Reconquista la relación con este tipo de agentes estatales- en el marco de un programa educativo- se presentaría como un escenario propicio para desarrollar uno de sus ejes para la transformación de la realidad: el territorio educativo. No obstante, para nuestro asombro identificamos a su vez otro tipo de “desajuste”, más bien en lo referido a la intencionalidad que se al programa Secundaria con oficios por parte de los tutores. Aún cuando el objetivo entre agentes y tutores sea el mismo: preservar las matrículas de las sedes y la finalización de los estudios secundarios de sus estudiantes; e incluso aunque ambos compartan la valoración de la educación como el medio para mejorar las condiciones de vida de los sujetos, lo que se logró verificar concretamente fue más bien un interés relativo respecto al desarrollo del programa en sí, por parte del colectivo. Nuestras primeras incursiones de campo nos han permitido advertir que no sería precisamente en el marco del programa educativo Secundaria con Oficio en donde los actores exigirían el reconocimiento de su “saberes locales” y experiencias sociales, sino que simplemente las empearían en tanto recurso a fin de preservar y acompañar el proceso educativo de los estudiantes del Área Reconquista. En su defecto, los actores si se muestran más interesados en preservar, fortalecer su vínculo con la universidad que para (re)producían conjuntamente de un espacio social particular: un territorio educativo. Y es precisamente en el campo académico –y no en el campo exclusivamente estatal- donde se demandaría la validación de la experiencia social.

Según las explicaciones de nuestros interlocutores la relación con la Universidad resulta ser un “escenario clave” para la construcción del Territorio Educativo. La relación que han entablado con la academia responde a una pretensión de “encuentro de saberes”, a través del diálogo y la misma se remonta a más de diez años. Más allá de sus posicionamientos discursivos respecto a un mutuo aprendizaje entre el saber teórico-técnico de la academia y el “saber popular” (experiencia social) para producir “saber aplicado” como herramienta socialmente útil y legítima para el conjunto de los implicados. Sin ánimos de contradecir los planteos de nuestros interlocutores, en principio podríamos plantear que en virtud del cumplimiento de sus ejes de trabajo (Reciclado y Medio Ambiente; Trabajo; Justicia y Hábitat; y Territorio Educativo) de “La Mesa” tomando como “*aliado estratégico*” a la Universidad no solo logran dar mayor visibilidad y reconocimiento institucional a las actividades que se desarrollan el territorio, sino también logra diseñar y participar en una agenda de acciones que promueven una experiencia común del saber comprometida con las problemáticas de la comunidad.

A modo de hipótesis, podemos suponer que el vínculo preferencial de los referentes de la Mesa Reconquista con la universidad responde en principio a tres factores: la universidad también se asume como parte del territorio, ajeno a tensiones y conflictos existe un vínculo sostenido en el tiempo, es parte del armado de la mesa reconquista. En cambio el vínculo entre los tutores socio-laborales con los agentes estatales se presenta más jerárquico, reciente y distante, no solo geográficamente sino también en la frecuencia de sus contactos y reuniones. Por consiguiente, si para el caso de la universidad/Mesa Reconquista nuestros interlocutores reconocen que esta pone en pie de igualdad sus “saberes locales” y sus experiencias sociales, podríamos definir su relación en términos de complementariedad basada en la horizontalidad y en el mutuo reconocimiento. Y para el caso de los agentes estatales/tutores socio-laborales teniendo en cuenta que nuestros interlocutores interpretan que existe simplemente una utilización de dichos saberes, podríamos definirla como una relación instrumental²¹, basada en una relación laboral. Por estas razones los actores deciden tomar con escenario clave a la Universidad para obtener el reconocimiento de sus experiencias sociales y

²¹ Cabe destacar que los tutores socio-laborales no se presentan antes los agentes estatales del programa como miembros de un colectivo (La Mesa) por el contrario, usualmente lo hacen como individuos que comparten un mismo territorio (Área Reconquista). En su defecto, al presentarse antes autoridades o representantes de la Universidad sí lo hacen en calidad de miembros de un colectivo de organizaciones territoriales.

convertirlas en “saberes locales”. Aquí la experiencia -en tanto recurso- se transforma en *capital cultural* luego de ser validada y reconocida por un “otro”, en este caso la academia.

Experiencia y autoctonía como recursos de legitimación. Agencia, recursos y repertorios morales

El otro nunca está completamente desprovisto de agencia:

tiene poderes y proyectos propios,

y la resistencia (desde la más sutil hasta la más manifiesta) (Ortner, 2016:176)

Pensar a los habitantes de los sectores populares como condenados a (re)producir sus condiciones de vidas en términos de marginalidad y carencia -siempre desde los márgenes de la sociedad- resulta una postura reduccionista o cuando menos falta de una mirada antropológica. Puesto en otros términos, significaría reducir la complejidad de la vida social a un juego mecánico de autómatas negándoles a los sujetos su capacidad de agencia—inherente a todos los humanos- y acción creativa que les permitiese sortear los condicionamientos de la estructura social y cultural. Por otra parte, los individuos siempre están integrados en redes de relaciones, de modo que; sea cual fuere la cualidad o cantidad de “agencia” que tengan, los pobres nunca están totalmente desprovistos de agencia²². Por consiguiente ¿Por qué asumir que así sin más aceptarán de una vez y para siempre las condiciones de vida que les ofrece un territorio estigmatizado?

Puesto así las cosas, -y sobre la base de la teoría de la práctica²³- nos resulta de gran interés pensar de qué modo los actores superan los condicionamientos de un territorio estigmatizado para la transformación de sus vidas mediante la apropiación, movilización y usos de ciertos recursos que en principio asumen de su propiedad: la

²² Desde el uso probablemente más común, “agencia” puede ser prácticamente un sinónimo de las formas de poder que las personas tienen a su disposición, de su capacidad de actuar por sí mismas, tener influencia en otras personas y en los acontecimientos, y ejercer cierto control en sus vidas. Sin olvidar, al mismo tiempo, que la agencia forma parte del proceso que Giddens denomina estructuración, es decir la configuración y reconfiguración de formaciones sociales y culturales más amplias. Por ende, la agencia en cierto punto está condicionada por estructuras mayores.

²³ La cual restituyó al actor en el proceso social sin perder de vista las estructuras mayores que condicionan (y también habilitan) la acción social.

*experiencia y la autoctonía*²⁴. Los cuales a su vez forman parte de un repertorio moral que clasificaremos como **repertorio**²⁵ **de legitimidad**.

Antes la falta de determinados bienes socialmente valorados— bienes económicos, bienes culturales, etc.- nuestros interlocutores despliegan determinadas estrategias para la demanda y/o gestión de proyectos, actividades o acciones colectivas alineados a sus ejes de trabajo para transformar la realidad de su comunidad. Dentro de estas estrategias en principio podríamos plantear: la elección de escenarios puntuales, de “referentes ejemplares²⁶” y la movilización de repertorios de legitimidad para la justificar su participación activa en el desarrollo de dichos proyectos. Partiendo de la concepción “dura” de agencia (Sewell, 1992; Ortner, 2016) desde la cual se remarca el fuerte papel de la intencionalidad activa²⁷ (no necesariamente consciente) de las prácticas sociales pensamos que sería útil entender las estrategias de nuestros actores.

Tomando el caso de la relación entre los referente de La Mesa Reconquista y la UNSAM las estrategias de los actores son llevadas a cabo bajo su capacidad de agencia²⁸ en tanto orientada a perseguir un proyecto. Desde este tipo de modalidad de

²⁴ Si bien por cuestiones de extensión no podremos profundizar la cuestión de los efectos de las diferencias de poder respecto a los recursos, sí podemos plantear que dicha diferencia no solo refiere a la legitimidad potencial de los usos que un actor hace de un recurso a los ojos de otros actores, sino también a la cantidad y variedad de recursos a los que un actor tiene acceso en un momento determinado, así como a la posibilidad de imponer o retirar recursos del acceso de terceros o -en último término- de transformar a los propios actores sociales y sus recursos en recursos para uso propio. Punto que nos parece clave para seguir analizando los modos de validación y reconociendo de los “saberes locales” y los tipos de recursos empelados para ello.

²⁵ Por su parte la noción de *repertorios morales* nos introduce —una vez más— en el campo de la agencia de los actores sociales (Lahire, 2004). Afirmar que los sujetos no están determinados mecánicamente por reglas no significa que neguemos la existencia de recurrencias en sus comportamientos. Para estos fines tomamos el concepto de *recursos* (morales, materiales, culturales) (Noel, 2009) y la idea de *repertorios* (Noel, 2013). Los actores sociales van siendo puestos en contacto, a lo largo de sus trayectorias biográficas, por medio de distintos tipos de recursos, los cuales pueden ser analíticamente reunidos en una serie de *repertorios* (Noel, 2013). El grado en que las asociaciones de esos recursos son compartidas por los actores es bastante irregular; y correlativa con sedimentaciones o incorporación ciertas prácticas y recorridos sociales. Por ende entendemos por *repertorio* al conjunto de asociaciones de habituales que los actores establecen a la hora de apropiarse, movilizar, hacer circular o asociar distintos recursos. En la medida en que la articulación de los recursos en repertorios es -en el mejor de los casos- una articulación contingente que tiene que ver con la frecuencia de las asociaciones socialmente habituales entre ellos, se comprende por qué y hasta qué punto sea central el rol de la agencia en la apropiación (Noel, 2013).

²⁶ Este concepto es utilizado por Caroline Humphrey (1997). Según la autora, los preceptos éticos y morales no se desprenden solamente de las normas y reglas, sino de los ejemplos de ciertos personajes, de historias, cuentos o mitos.

²⁷ De esta manera separamos la agencia de las prácticas rutinarias que exigen poca reflexión.

²⁸ En su trabajo “Antropología social y Teoría Social” Ortner (2016) dedica un capítulo exclusivamente a desarrollar una serie de reflexiones sobre la *agencia*. Allí distingue dos modalidades de agencia una relacionada con ideas de poder, resistencia y dominación y otra vinculada con la intención, los proyectos

“*agencia en el sentido de (prosecución de) proyecto, es que esta se organiza y define por la lógica local de lo bueno y lo deseable y la forma de conseguirlo*” (Ortner, 168:2016). En ese sentido, y aun cuando el ámbito de la academia se presente como un escenario propiciado -por una serie de factores y actitudes de los representantes de la Universidad que ya hemos descripto- para transformar la experiencia social de los actores del territorio en “saberes locales”, los referentes de La Mesa reconquista deben recurrir a la experiencia social y la autoctonía, ya que estas serían los dos únicos recursos que solamente ellos pueden poseer y los otros (sean agentes estatales o representantes de la academia) no. Pese a cualquier esfuerzos que haga cualquiera persona ajena al Área reconquista siempre estarán privados de la *expertis* que da el territorio – y sus particularidades- carecerán de la experiencia directa con los modos de vida y por ende es ahí, en esa situación -y en virtud de logran las transformaciones deseadas para el territorio- que pese a las relaciones asimétricas es cuando los actores territoriales pueden jugar “sus cartas” ganadoras y poner en diálogo los “saberes académicos” con los “saberes locales”.

A modo de cierre – o más bien de apertura- quisiéramos plantear una serie de inquietudes con la intención delinear algunas líneas para futuros trabajos. Sin negar que en los dos casos que presentamos, de algún modo u otro, existan diferentes tipos de reconocimiento en cuanto a la experiencia y los “saberes locales” de los actores locales de Área Reconquista, lo cierto es que ello no necesariamente se traduce en la eliminación de las relaciones asimétricas. En este sentido ¿es posible considerar la experiencia y los “saberes locales” de los actores colectivos del Área Reconquista en términos de lo que James Scott dio en llamar las “armas de los pobres”? ¿Los “saberes locales” en tanto recursos de las estrategias de resistencia de los oprimidos siempre devendrán en capital subordinado?

Bibliografía

Bourdieu, P. (1977) *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press

(culturalmente constituidos) de los individuos y su capacidad de sostenerlos y representarlos. Advertiéndonos que si bien la agencia de proyecto no tiene que ver necesariamente con la dominación y la resistencia, es posible que esta cuestión no esté ausente.

del Cueto, C. (2008) *Rompecabezas : transformaciones en la estructura social argentina:1983-2008* / Carla Muriel del Cueto y Mariana Luzzi. - 1a ed. – Los Polvorines: Univ. Nacional de General Sarmiento; Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2008

Hall, S. “*Estudios Culturales: dos paradigmas*”. *Causas y azares. Los lenguajes de la comunicación y de la cultura en (la) crisis*. No 1. Buenos Aires, 1994.

Humphrey, C. (1997)

Kessler, G. (2014) *Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003 - 2013*. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

Lahire, B. (2004). *El Hombre Plural: Los Resortes de la Acción*. Barcelona: Bellaterra.

Merklen, Denis (2005) “Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática de Argentina, 1983-2003”, 1ª ed., Buenos Aires, Gorla,

Merklen, D. (2000): “Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos aires hacia fines de los „90”, en Svampa, M. (edit.): Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Buenos Aires: Biblos/UNGS.

Noel, G. (2013) *De los Códigos a los Repertorios: Algunos Atavismos Persistentes Acerca de la Cultura y una Propuesta de Reformulación* RELMECS, diciembre 2013, vol. 3, n° 2. ISSN 1853-7863 <http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/>

Ortner, S. (2006). *Anthropology and Social Theory*. Durham: Duke University Press.

Rockwell, E. (1987). *Reflexiones sobre el proceso etnográfico*. Dpto de Investigación Educativa. IPN México.

Simmel, G. (1986): *Sociología. Estudios sobre las formas de socialización*. Madrid: Alianza.

Otras fuentes

<https://educacionadultos.com.ar/wp-content/archivos/2018/07/Manual-de-Implementación-de-Secundaria-con-Oficios.pdf>

Recuperar e integrar el saber propio y de otros. Gestión común ante implicancias de conflictividad jurídica y deuda popular

Cintia Cavallo

Este breve ensayo pretende describir y analizar el estado de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) en Argentina durante el gobierno de Cambiemos, poniendo énfasis en el estudio de los problemas organizacionales y dirigenciales que giran en torno a la ardua expansión y dependencia financiera. En el texto predominan contribuciones de la sociología económica con la finalidad de analizar exhaustivamente entrevistas y material recolectado de fuentes secundarias (notas periodísticas).

En la actualidad, el capitalismo –que adopta la forma de financierismo– ha demostrado tener un impacto impetuoso sobre el escenario de competitividad cuya figura rectora suele ser la de una empresa industrial en un país, como la Argentina, de tradición “mercado internista” o de menor “concentración económica” que, por ejemplo, otros de la región. De esta forma, ha planteado nuevos desafíos y nuevas amenazas a las estrategias de valorización productiva que privilegian la preservación de la fuerza de trabajo y la estabilidad de su organización. Impacto “financiarizante” que puede ser decisivo sobre todo en casos de la llamada, por sus integrantes y promulgadores, *empresa recuperada*. El problema que se intenta esbozar, da cuenta de que la irrefrenable expansión internacional de la especulación financiera, junto a la “volatilidad” y “extralegalidad” del tipo de estrategias que la acompañan, podrá dirigir su embestida contra la organización productiva autogestionada, forzándola, por ejemplo, a un endeudamiento que restringe técnicamente, al menos en principio, el margen de decisiones “internas”, considerado condición constitutiva de tal tipo de emprendimiento. La gestión financiera, mediada con acuerdo colectivo, lograría así, impactar sobre el nivel de autonomía de estos gestores recuperadores creando mecanismos “promisorios” que, en los marcos de deuda y riesgo existentes, pueden compensar los reveses económicos trasladados a sus organizaciones por el sistema financiero dominante.

En Argentina, el panorama institucional, sobre todo orientado a la pequeña y mediana empresa, puede verse lesionado por condiciones de precariedad jurídica e insuficiencia de herramientas crediticias que conducen a pugnas inevitables por la condonación de

deudas y tarifas “diferenciales”. El discurso sobre las necesidades obreras se verá forzado a imaginar alternativas en un periodo de crisis económica, a partir del cual, la materialidad de las demandas expresará una ineludible revisión de deudas (acuerdos, leyes, inversiones, tarifas) que, con frecuencia, evidencia depender de la gestión pública a nivel local y nacional. Cuando la pretensión es la de acceder al poder representando un saber autorizado, el saber (recuperacionista) sobre la economía intentará para ser útil mostrarse “original”, “real” y “popular”. Los entrecruzamientos en la vida obrera y social, así formulados, son varios y variables, y con frecuencia atañen al “barrio” y a las nociones y prácticas esgrimidas en torno a la integración, el refugio, el reconocimiento en el trabajo, y la añoranza de “no caer más”. El encuentro cotidiano en los espacios de convivencia productiva anuncia una situación política concreta, al parecer, inclinada a un específico modo de economía fundada en valores inéditos de formación, aprendizaje, “cultura obrera”.

1. Institucionalidad popular en incertidumbre jurídico financiera

El capitalismo actual que adopta la forma que hemos llamado financierismo ha demostrado tener un impacto vehemente sobre el escenario de productividad que le corresponde, generando contextos de economía volátil descentralizante sobre todo para las pequeñas y medianas industrias. Al indagar los procesos de poder y tecnologías que organizan la cotidianidad de las unidades recuperadas, el ensayo podrá advertir la implicación de prácticas y juicios que dan forma a las relaciones de mercado, permanentemente valuadas en términos monetarios y comunicacionales. En dichos procesos, ciertos pronósticos o “apuestas” financieras que aventuran valores a futuro introducen riesgos determinantes para los actores, cuya racionalidad viene clausurada por el uso de herramientas especulativas que les caracteriza (Appadurai, 2017: 72). La sospecha es que, mientras la financiarización domine la escena económica convirtiendo los bienes en “valores colocados en la bolsa” (Lazzarato, 2013: 28), el proceso de intercambio en la organización recuperada requiere, para enriquecer el carácter comunitario de su estrategia productiva, evidenciar valor “transaccional” (Dewey, 1949).

Considerando así los problemas de la gestión del saber común en un contexto de avance de la valorización financiera, este análisis da cuenta del detrimento de la llamada economía productiva allí decurrente. En particular trata esos problemas y los efectos, destructivos y/o constructivos que pueden generar con vías a su autogestión y sus consecuencias en el ámbito jurídico. Podremos encontrarnos con una organización

autogestionada que, afectada por una especulación financiera bajo el control comercial de “grandes” empresas e internacionalizadas, subsiste no solo en los marcos inciertos de la economía nacional (y global) sino también en los persistentes “limbos” de juridicidad desestabilizadores de los marcos institucionales vigentes. Recurrentemente excluidas de las ventajas de exportación, perjudicadas por una escalada tarifaria de los servicios básicos e impedidas de participar en mercados financieros, ciertas empresas pequeñas, medianas y recuperadas, adoptan una retórica práctico-moral que parece distinguirlas de la usada en la reproducción capitalista clásica sobre costos de inversión, estrategias de invención y demandas de reconocimiento.

La explotación financiera que consigue impactar sobre el nivel de autonomía de estos gestores recuperadores podrá crear mecanismos “promisorios” sobre un “futuro incierto” en los marcos de deuda y riesgo política e institucionalmente existentes. En efecto, para las unidades de producción mencionadas, la asimilación de los embates de la economía financiera se traduce en el descubrimiento de un porvenir basado en “deudas” e “intereses” cuyo orden y equilibrio les es desapropiado (Lazzarato, 2013: 29). Potenciada por la crisis del modelo industrial, la dependencia financiera se ha extendido en sus vinculaciones con las necesidades “incalculables” de sectores de bajos ingresos aunque, al mismo tiempo, llevando a cabo un proceso de disolución o restricción de sus herramientas crediticias. En el caso argentino, además, se asistió a una situación en la que trabajadores y sectores populares “dolarizaron” sus costos de vida, hecho consumado por una singular decisión de Estado: la dolarización de las tarifas de los servicios públicos. Aunque esa política se extiende a otros sectores sociales, los efectos auguran riesgos determinantes para los sectores de bajos recursos, para quienes cada paso hacia el futuro les pareciera indicar un endeudamiento cada vez más escabroso, una “deuda de vida”.

Poder económico y conflicto jurídico financiero

Los conflictos de desequilibrio institucional que, con frecuencia, adquieren preeminencia en los procesos de empresas recuperadas por sus trabajadores, podrán, esta vez, exacerbar los efectos de incertidumbre económica que se imponen en la experiencia popular. Una buena parte de los estudios sociales que giran en torno a la organización de empresa recuperada en Argentina, ha tendido a comprender los problemas de inestabilidad e irresolución jurídica como expresión constante de las carencias económico-productivas reales del sector. En base a tal abordaje, se trata de

evidenciar de qué manera ese vaivén jurídico impacta sobre oportunidades de financiamiento y efectividad comercial. Esto reconociendo que, aun cuando la organización productiva logre sortear la ralentización o el poder de veto del sistema jurídico²⁹, se encuentra obligada a superar las barreras de acceso, por ejemplo, a herramientas crediticias, ya que como menciona un portavoz de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA): “nadie quiere dar crédito en este limbo jurídico” (revista La vaca, 2007).

Como resultado del carácter congruentemente incierto de su diligencia futura, entonces, es usual avistar discursos, de Estado y de entidades financieras, que descreen de la capacidad de esos sujetos recuperadores para efectuar pagos futuros a acreedores. El análisis de estos escenarios permite dar cuenta de que la vida económica (y no solo la económica) se experimenta atravesando “(e)valuaciones” realizadas por determinados sujetos pero también las realizadas sobre ellos, lo que interfiere en su aprendizaje de la realidad y la toma de decisiones que lleven adelante (Wilks, 2018: 12). Aun superados los años críticos del 2001 y 2002, el panorama de incertezas jurídico financieras prosiguió, y obligó a esos nuevos actores de empresas recuperadas a maniobrar en un terreno político que se mostraba renuente al otorgamiento masivo de concesiones por parte del Estado. En esta clave política y reconociéndose como parte de una economía ampliada, el discurso sobre sus necesidades requirió, para continuar ganando legitimación política, de “sentarse a conversar” con diversos actores. Cumplido ese primer propósito, podrían aspirar luego, a disputar el enfoque provisto por el “poder económico” imperante:

Cuando nuestro movimiento surgió, allá por el 2002, podías ir de guapo a todos lados por el contexto de crisis terminal que vivía el país. Hoy necesitas hablar con todos (...), la economía social nos excede a las empresas recuperadas; hay que tender a un armado más amplio que nos permita disputar con el poder económico que domina el mercado. (Representante de FACTA. Revista La vaca, 2007)

²⁹ Según el registro del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de la UBA (2018), en los últimos años, la irresolución de problemas judiciales, como la ley de expropiación, condujo a desalojos o cierres. En algunos casos, eso fue posible directamente por la decisión judicial de no renovar la continuidad productiva reclamada por las ERT, aunque también hubo desalojos en fábricas que ya se habían conformado en cooperativas e incluso consiguieron la expropiación. De una u otra manera, esto se tradujo en que una buena parte de las expropiaciones fuera trabada o “vetada”.

El punto es que, tratándose de una disputa por el “poder económico”, en realidad “financiero”, la discusión en las empresas recuperadas puede distinguirse constructivamente de la de otros sectores, incluso de la que se da en alguno como el de las pymes, considerado habitualmente aliado potencial. Si se tienen en cuenta los problemas aparejados por los altos costos de los servicios básicos en los últimos años³⁰, pueden identificarse ciertos perjuicios económicos que han impactado gravemente sobre las organizaciones productivas, aún más, sobre las de pequeño y mediano tamaño que no se reconocen “especulativas” ni “exportadoras” (Ruggeri, 2018). En lo que a esto respecta, la disputa por el “poder económico” podrá traducirse en una confrontación entre modos de concebir y gerenciar aprendizajes en la empresa, costos y destino de capitales. Un directivo de empresa pyme explica que su tarea, en este último tiempo, ha sido la de reflexionar junto a consumidores y proveedores “cómo acompañarse” para crear nuevas transacciones y obtener beneficios comunes de esas relaciones. El directivo resalta que uno de los temas más valorables de su gestión es el enfoque respecto del empleo de mano de obra, el cual, representaría un 50% de la “inversión” empresarial. Tratando de disentir con una lógica que parece simplemente privilegiar la óptima maximización de ganancia en la empresa por sobre la necesidad común (en este caso, de empleo), su discurso indica que el sueldo no puede entenderse como mero “costo” para la empresa, donde el trabajador, además, involucra saberes de trabajo. Aunque en el relato se destaque la capacidad de instaurar y reivindicar valores de “inversión” y “formación”, y que la extensa mayoría del empleo hoy es generado por dichas empresas, también se menciona que éstas no son convocadas por entidades gubernamentales para discutir proyectos de trabajo que reconozcan valor en sus juicios de extensibilidad y capacitación laboral:

Tratamos de ver con los clientes, con los proveedores, cómo nos acompañamos para poder “inventar”, esa es la palabra, negocios cada día, para poder alimentar y sostener esto. El tema del personal es muy delicado, es un número que para nosotros representa el 50% del costo, pero no es un costo un sueldo, es una inversión. (...) tenemos toda una política de formación técnica, y bueno, desprendernos de una persona es una gran pérdida, no es un ahorro, acá también disentimos. Pero repito, 75, 80% de empleo generan las pymes y no son

³⁰ Según cifras del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de la UBA (2016), se estima que el aumento tarifario sobre las ERT ronda entre un 200 y 700% en el servicio eléctrico y hasta más de 1300% en el gas, entre febrero/marzo y abril/mayo de 2016.

llamadas a dialogar. (Directivo de textil pyme del partido General San Martín. Rebello, 2018)

La tradicional organización industrial de bajo capital concentrado, desdeñada por una competencia internacional productiva y tecnológicamente disruptiva, con regularidad se ha visto forzada a agudizar su dependencia financiera ante necesidades de la cotidianidad. Dando cuenta de un registro que apela a memorias del año 2015, puede verificarse que el dramatismo financiero de empresa luego de ese año fue contundente en tanto prevalecieron un conjunto de factores, como por ejemplo, la política pública de dolarización de servicios básicos y de restricción monetaria. Esta experiencia de vida y trabajo “dolarizada” podrá asentarse como mecanismo de aprendizaje para la interpretación de instrumentos financieros como créditos y deudas, y en ese sentido, para considerar “una realidad en continuo movimiento” y, en la mayoría de los casos, “profundamente inestable” (Luzzi y Wilkis, 2019: 303). Una devaluación en crecimiento y el consecuente encarecimiento de bienes trajo consigo caída en ventas, así como también, propuestas bancarias de financiamiento respaldadas por tasas de interés colosales. El prefinanciamiento de una exportación, como menciona un directivo pyme, podía conducir a una deuda voluminosa con entidades financieras, sobre todo, luego de que el Banco Central decidiera contraer el otorgamiento de suministros crediticios a pymes.³¹

Nosotros terminamos 2015 con la fábrica renovada, 12 locales comerciales y 70 empleados. Ahora nos quedan 8 locales y 45 empleados. Tenemos los principales costos dolarizados porque el Gobierno dolarizó las tarifas, los combustibles y los insumos básicos están dolarizados. (...) La devaluación nos encarece todo muchísimo, pero la demanda se cae y los bancos te cobran cualquier tasa para financiar capital de trabajo. ¿A qué tasa voy a prefinanciar una exportación, ahora que me dicen que la salida es exportar? El Banco Central eliminó la obligación a los bancos a prestar el 10% de los depósitos a las pymes y eso nos sacó mucha financiación. En 2003 habían quedado solo 60 fábricas de pie en el rubro marroquinería, en 2015 llegamos a 400 y en estos dos años ya perdimos 70 empresas. En 2015 había 420 importadores registrados y hoy son

³¹ Si bien el presente texto no tiene la ambición de abordar en detalle la experiencia productiva y financiera de las empresas pyme, se podrá avistar un conjunto de problemáticas comunes a las ERT, aun cuando las respuestas a las mismas puedan variar. Puede denotarse, por ejemplo, que hacia 2016 la mayoría de las pymes en Argentina deciden reducir la demanda de créditos dado el considerable aumento de la tasa de interés y la caída de ventas. Se agrega el hecho de que las líneas de financiamiento para pymes creadas a partir del 2003 decrecieron y/o fueron eliminadas entre 2016 y 2018 (Gasparini y Ottone, 2018).

1470. Así no tenemos destino. (Industrial del partido de General San Martín. Cufre, 2018)

Teniendo en cuenta un contexto de transformación vertiginosa y avance estrepitoso del capital financiarizado, este análisis promueve atender el debate que gira en torno a una economía “popular” que, sin perder calidad ampliable, reformula su organización y la somete a un juicio de endeudamiento que pueda “banca”. El financierismo que refuerza su poderío en la provisión de herramientas crediticias, consigue afianzarse en la vida popular como consecuencia de un proceso económico y social que combina inflación, tasas de interés elevadas y caída de poder adquisitivo, en respuesta a ciertos criterios que priorizan atender o mejorar un consumo que permanece en déficit permanente. Se trata, en palabras de Paul Langley (2008), de un proceso de “financiarización de la vida cotidiana” y, por eso, de prácticas, relaciones sociales, saberes, identidades y valores. Esta configuración institucional financiera conseguiría formatear cada vez más el desarrollo y los dinamismos de una sociedad que parece estructurarse en una deuda cotidiana. Un referente de estos procesos de recuperación de empresas aludía a esa expansión del capital financiero que parece procurar un aseguramiento de dependencia financiera (pagos) en el futuro:

Nunca nos pasó que un banco nos invite a recuperar a un cliente, entonces, me parece que esto se va a potenciar y tenemos que estar atentos a esa circunstancia porque en definitiva es la realidad más cotidiana en la que los tipos van a seguir comiendo. (Referente técnico-popular de procesos de ERT)³²

2. Economía en red: saber y política de dirección barrial

Desde que los estudios relacionados a la “empresa recuperada” se han planteado conceptualmente los problemas de la generación y acatamiento de decisiones designables “legítimas” han permitido un acercamiento constructivo al análisis no solo de una singular capacidad decisional “técnica” teniendo en cuenta, por ejemplo, situaciones de incertidumbre, sino también, la toma colectiva de decisiones. Para los intereses de este análisis, resulta crucial comprender cómo estas dos modalidades de resolución de conflictos y de aseguramiento de productividad se vinculan con una particular cultura “en red” de carácter “popular” en tanto consigue ofrecer modos ampliamente heterogéneos de saber, organización y acción. Desde este enfoque, en la

³² Extraído del Seminario Permanente de Relaciones Laborales Aplicadas (SEPERLA), CETyD y SEP-TeSA IDAES UNSAM, 11 de mayo de 2018.

vida urbana o “ciudad”, donde se desarrollan y resuelven los conflictos situados y extendidos y, simultáneamente, se integra sociedad, se pueden distinguir experiencias de productividad fragmentadas, muchas de ellas sometidas a prácticas de no reconocimiento.

Dado que la velocidad y multidirección con la que cambia la vida en las urbes puede tornarse vertiginosa, atravesada por la creciente expansión de los mercados financieros y transformaciones tecnológicas globales, y amenazar toda perspectiva de futuro porque trae consigo exclusión u opresión, la ciudad puede conformar un ámbito para la política ciudadana más concreto, esto es, “práctico” (“real”), que la nación (Sassen, 2010: 245). Aun así, en tiempos de crisis, cuando el nivel de “moralidad” se rebaja o la meta a alcanzarse se eleva más (Gramsci, 2010: 179), la posibilidad de reconstruir efectivamente la vida social y política puede verse restringida, haciendo notar una acción estatal con deficiencia para asentar grados de previsibilidad, sobre todo, para el futuro de los sectores más postergados. La referencia habitualmente tácita al espacio común de orden político, donde se puede “estar a gusto”, “junto a los demás” y “recurriendo a ellos”, puede entonces perder valor, derivar en un profundo sentido de inseguridad o aislamiento (Donzelot, 2007: 39). Para comprender de qué forma estas experiencias productivas logran constituir relaciones y disputar diferencias en el orden público, aun (o sobre todo) en estas circunstancias, nos valdremos de conceptos que, con frecuencia, han hecho referencia a la vida asociativa y a las necesidades de “integración” en una comunidad políticamente signada.

Cuando imágenes de inseguridad cívica registran el alto nivel de violencia e inestabilidad que sacude al mundo del trabajo, y a su orientación social y técnico-legal, diremos, leyendo a Jacques Donzelot (2012: 34), que los valores de una ciudadanía territorial merecen ser recuperados para “salvar” a la comunidad de la segregación potencialmente anómica que puede destruirla. En las palabras del sociólogo francés citado, “hacerle justicia a la ciudad” es una invitación a reflexionar sociológicamente acerca de las representaciones urbanas y, por lo tanto, de las calles, los barrios, las asociaciones que en algún momento han sido desvalorizadas y ocultadas. Nancy Fraser (2008: 41-42) al distinguir estos escenarios de “lo político” como dimensiones de la justicia, nos permite contemplar las condiciones de jurisdicción del Estado y las reglas de decisión con las que éste puede estructurar la confrontación en el campo productivo. Lo político, en ese sentido, configura el ámbito en donde se desarrollan “las luchas por la distribución y el reconocimiento”, estableciendo criterios de pertenencia social y

determinando quién cuenta como miembro: quién está incluido y quién excluido del conjunto de los que tienen derecho a la vida y gobierno en ciudad, sus dinámicas sociales y los saberes que las definen.

Economía barrial y popularización de la deuda

Poniendo en el centro del análisis la caracterización de una economía “popular” sometida en forma “desigual” a las relaciones financieras (Chena, 2017: 49), se intenta divisar cómo ciertos actores de Estado y “grandes” empresas la han asimilado, por ejemplo, a una economía de baja productividad, atrasada tecnológicamente o incluso insolvente (Chena, 2017: 41). En lo que a esto respecta, el esquema de “tarifazos” regido desde 2016 (Ruggeri et al., 2018) ha sido una de las políticas públicas que más ha problematizado la circulación de dinero y las garantías a futuro de los sectores más relegados. Ha derivado, por ello, en un conflicto político dramático y extensible y en la exploración de alternativas, por parte de los trabajadores, que posibiliten paliar los efectos de las crisis financieras, dando cuenta del endeudamiento prolongado y masivo en el que se hallan inmersos. El peligro de “ahogar” la experiencia obrera se atisba de modo prominente cuando una generación (acelerada) de deudas se acumula y se corresponde, además, con servicios claves para el desarrollo de la producción.

Desde esta lectura, la cadena de trabajos dispuestos en el entorno de la empresa no puede desligarse de aquel carácter acumulador “a futuro” del capital financiarizado que atraviesa la organización empresarial y vida popular, tanto en fases de crecimiento productivo como en las de retroceso. En aquel entorno urbano, el “barrio” adquiere un lugar central. En la explicación de François Dubet (2010: 172), se trata de un ámbito en el que se desenvuelve, sobrevive y se configura todo un mundo y redes potenciales de negocios, oportunidades y trabajos que se hacen notar según indicadores de participación colectiva. En la actualidad, no obstante, a partir del cierre de empresas y suspensión de actividades, el detrimento productivo ha conseguido imbricarse hondamente. Un comerciante narra que aun cuando este tipo de problemas hayan sido afrontados en otros tiempos por los barrios más desdeñados, éstos no han solidificado una plena recomposición productiva, y la erosión económica los puede arrastrar a una crisis desmovilizante. Es preciso traer a cuento una de las contribuciones de Donzelot (2007: 46), la cual sostiene que la comunidad territorial ofrece diferentes posibilidades para recomponer redes productivas y una vida en sociedad que se derrumba. Esto en tanto se consagren relaciones políticas y una particular preocupación por el “«entre sí»

protector” que moviliza, en parte, la representación del pueblo, de una comunidad fundida en prácticas de apoyo y refugio como fundamento intrínseco de toda opción socialmente válida.

Cuando hay trabajo y producción se abren muchas fábricas, se llena de tránsito y aparecen los servicios para atender a esa gente: rotiserías, kioscos, fletes, remises. Ahora, cuando viene todo mal, rápidamente cierran los talleres y las pymes. Hoy el deterioro es muy profundo. Villa Progreso y Villa Lynch son barrios luchadores. Pero ahora aparentemente se nos acaban los recursos y las fuerzas. Acá nunca se compuso del todo después de la crisis de 2016, pero al menos hasta febrero de este año la cosa no empeoraba. Ahora se cayó todo a una velocidad casi eléctrica. (Comerciante de panadería en partido de General San Martín. Cufre, 2018)

La economía barrial, un sinnúmero de veces perpetuada como economía infortunada financieramente, deberá responder, entre sus descalabros inmediatos, a los efectos de una deuda (para el caso) tarifaria que está fuera de su capacidad de pago y que se extiende en la economía productiva sin restringirse a empresas específicas. Aquello refleja que, luego del declive industrial profundizado en los últimos años (Ruggeri et al., 2018), la experiencia común fue quedando condenada, cada vez más, a una inusitada morosidad “popular”. En efecto, al menos dos grandes problemas se robustecieron en esa sociedad “barrial”: el desempleo y la interrupción en la cadena de pagos. “Debía y le debían” describe un comerciante para explicar el cierre de una fábrica de plásticos ubicada en el partido de General San Martín. Para los comerciantes que viven el barrio incluso cobrar “fiados” se vuelve improbable, y se ven obligados a vender bienes personales para poder mantenerse con “crédito”. En tal contexto, explican, se profundizó la caída de ventas en negocios, trayendo consigo imposibilidad de renovación contractual y caída estrepitosa del empleo. Algunas fábricas solo mantienen al dueño y a algún que otro empleado, otras optan por no elaborar más ciertos productos, ya que, en este momento, lo menos costoso, pareciera ser importarlos. No solo las fábricas y comercios son afectados, quienes no cuentan con local que alquilar o conservan un empleo informal, redujeron sus actividades y/o se desvincularon de colaboradores. Asimismo, el cierre de empresa implicó la pérdida de empleo de quienes operaban externamente manteniendo un vínculo (aunque no necesariamente exclusivo) con la empresa implicada.

A mí me cayeron 30% las ventas. Se hace difícil cubrir las tarifas. La ferretería industrial de la vuelta, con tres empleados, cerró. (...) La fábrica de bolsitas de

nylon de la vereda de enfrente que tenía ocho mujeres trabajando y un encargado queda solo el dueño y tres chicas. La fábrica de pintura látex no fabrica más la base blanca. La importa y envasa solamente. Echó a ocho operarios y se quedó con los tres más antiguos. El herrero no trabaja más, un empleado afuera.

(Comerciante de panadería en partido de General San Martín. Cufre, 2018)

Los reveses de una política económico-productiva que estrecha los términos y límites de financiamiento de los sectores populares han de hallarse, a su vez, acompañados por el despliegue de un discurso estatal socialmente en desarraigo que descarta comprender como legítima la posesión obrera (colectiva). Un dato curioso, asociado al conflicto de propiedad, es que muchos trabajadores decidieron alquilar locales particulares para evitar la “cruenta” violencia del despojo obrero en los operativos de desalojo. Además, en muchas de estas recuperaciones recientes hubo una cooperación sindical activa que ofreció aportes, por ejemplo, en la orientación social y técnico-legal de la empresa, en un intento por derrumbar el mero acompañamiento “simbólico”. Como es usual, se agrega el hecho de que el proceso de recuperación instó a salir del cerco fabril más tradicional: “después de ocupar el lugar, nos enteramos de que el bar de la esquina también es recuperado... estuvimos años viniendo a trabajar sin enterarnos”, señala un operario (Página 12, 2018). En gran parte, aquella experiencia política expresa la posibilidad de organizar y dirigir la vida y el trabajo sentando bases de comunidad, “en favor de cierta perennidad en un lugar”, de la apropiación del espacio y de la adquisición de una representatividad común a través de él. Por medio del barrio, la experiencia y dirección política aparecen “bajo la mirada de todos” (Donzelot, 2012: 40).

Desde este enfoque, se intenta describir y analizar el desarrollo de una economía popular que brinda indicadores de política ciudadana, tratando de comprender de qué forma los trabajadores de estas organizaciones productivas acuden a entidades y actores diversos a fin de asegurar la continuidad de sus actividades, aún más, cuando el riesgo de cierre para muchas de estas empresas recuperadas se manifiesta como un problema latente. Algunas, anticipan la amenaza que supone tener una deuda acumulada con compañías eléctricas y gasíferas y realizan reclamos, aunque generalmente no obtienen respuestas. Otras padecen cortes de suministros, lo que evidencia el punto más delicado

de la cuestión puesto que a ello le sigue un probable cierre de fábrica.³³ Entre los casos relevados, la política tarifaria ha derivado en un endeudamiento prodigioso de la pequeña y mediana empresa que, según indica un trabajador, llevaría a un quiebre inevitable de la red industrial que configura tanto el “adentro” como el “afuera” de la fábrica:

[El cierre] implicaría también pérdidas económicas para más de trescientas familias al ser un punto clave para cartoneros y carreros de la ciudad que venden los cartones a la planta que los recicla para la producción de papel. (Trabajador de empresa recuperada papelera ubicada en la ciudad de La Plata. Gimenez, 2019)

Los problemas organizacionales y dirigenciales que pueden derivar de un endeudamiento regresivo de los sectores populares, cabrán pensarse en base al establecimiento de nuevos derechos sociales que permitan alejarse del mundo exclusivamente de mercado y superar la transacción “interindividual” para constituirse en “colectivos”. Estas transformaciones se corresponderán con el reconocimiento de la actividad laboral como acto social y, por eso, no puede confundirse con una “actividad privada”. El trabajo, convertido en “actividad pública colectiva”, se considerará, entonces, dentro de un sistema de derechos y deberes sobre la base de una pertenencia compartida, fundamento de una “ciudadanía social” (Castel R., 2012: 67-68). Cuando se avanza en el estudio de estas comunidades productivas, es usual encontrarse con que, aun cuando el trabajo sigue siendo elemento de alienación y explotación, consigue construir una plataforma pública que le permite al trabajador “ser reconocido” en base a un conjunto de derechos ciudadanos (Castel R., 2012: 69). La red comunitaria generada, mediante un persistente tejido informacional, potencia la justificación de “proyectos” extensibles a diferentes unidades productivas, y se apropia de un discurso de organización colectiva que reviste de caracteres “populares” al territorio, excediendo los marcos de la empresa y las lógicas de mercado, y encontrándose, por eso, “anclada en lo real” (Boltanski y Chiapello, 2002: 33). En esta clave de lectura, el reconocimiento cívico barrial podrá adquirir carácter colectivo en tanto consiga expresar ya no solo valores de integración social sino de una determinada cultura popular.

Consideraciones finales

³³ De acuerdo con el informe del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de la UBA (2018), hasta octubre 2018 se registran cuatro casos que tienen paralizada su producción por cortes de electricidad (tres de ellos) y gas (el que resta).

El presente texto tiene el objetivo de brindar, sin pretensión de plantear conclusiones definitivas de lo registrado, un análisis preliminar respecto de los problemas teórico-políticos de organización y dirección en procesos de empresa recuperada, en un momento en el que el avance del financierismo global suscita profundas transformaciones en el ámbito productivo y en las relaciones socio-laborales.

En Argentina, el discurso institucional dominante, en particular, referido a la pequeña y mediana empresa, con regularidad puede entrar en conflicto con las necesidades jurídico-financieras de aquella. Durante crisis económico-financieras, cuando aquellas condiciones parecen agravarse, el testimonio obrero se encuentra obligado a imaginar alternativas que expresen una revisión inmediata de deudas dados los marcos de imprevisibilidad jurídica y presupuestaria vigentes. Aun cuando las redes informales de consumo y crédito cumplen un rol central al atravesar relaciones familiares y barriales, la transición a sistemas económicos modernos (créditos formales) de los sectores populares se torna determinante cuando se pone en juego su desenvolvimiento productivo.

Como puede observarse a lo largo del estudio, la convergencia entre experiencia obrera y ciudadana con frecuencia concierne al “barrio” y a las nociones y prácticas que rememoran y actualizan una disputa permanente con el poder económico imperante en y fuera de los sistemas que las regulan. En momentos de mayor dramatismo, de derrumbamiento de su valor de mercado, la comunidad productiva afronta uno de sus fracasos más ruinosos: la inmovilidad. Entre sus resultados más evidentes cabe advertir la escalada de un “endeudamiento popular” cada vez más extendido, no circunscrito al ámbito productivo. Reconponer y reorganizar aquella economía conexionista implicaría, para los actores que le confieren valor, poner en acción una singular práctica ciudadana que reconozca en la experiencia colectiva y en la expansividad de saberes, factores congruentes para la provisión de garantías “a futuro”. Recurriendo a textos gramscianos (2014: 75-76), diremos que, desestructurando lo preestablecido en la vida urbana se divisa el proyecto de un “mundo organizado” de modo diferente, manifestado en el impulso por fundar una cultura propia de sectores “subalternos”, que considere a la voluntad, la acción y la decisión política como expresión eficiente de economía.

Bibliografía

Appadurai, A. (2017): *Hacer negocios con palabras. El fracaso del lenguaje como clave para entender el capitalismo financiero*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Boltanski, L. y Chiapello, E. (2002): *El nuevo espíritu del capitalismo*, Akal, Madrid.

Campione, D. (2014): *Leer Gramsci: vida y pensamiento*, Continente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Castel, R. (2012): *El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Chena, P. (2017): “La economía popular y sus relaciones fundantes”, en *Los desafíos del trabajo sin patrón*, Colihue, Buenos Aires.

Dewey, J. (1949): “Common sense and science”, en Dewey, J. y Bentley A. (1949): *Knowing and the Known*, Beacon Press, Boston.

Donzelot, J. (2012): *¿Hacia una ciudadanía urbana? La ciudad y la igualdad de oportunidades*, Nueva visión, Buenos Aires.

Donzelot, J. (2007): “La ciudad de tres velocidades”, en VV.AA: *La fragilización de las relaciones sociales*, Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Dubet, F. (2010): *Sociología de la experiencia*, Editorial Complutense y Centro de Investigaciones sociológicas, Madrid.

Fraser, N. (2008): *Escalas de justicia*, Herder, Barcelona.

Gasparini, C. y Ottone, L. (2018): “Las PyME en Argentina: actores clave y problemas recurrentes. El acceso al financiamiento”, *Ec-Revista de administración y economía*, Año I, N°1. Recuperado de <https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/ec/article/view/99>.

Gramsci, A. (2010): *Cartas desde la cárcel*, Nueva Visión, Buenos Aires.

Langley, P. (2008): *The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in Anglo-America*, en Wilkis, A. (2014): “Sociología del crédito y economía de las clases populares”, *Revista Mexicana de Sociología* 76, núm. 2 (abril-junio), México.

Lazzarato, M. (2013): *La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal*, Amorrortu, Buenos Aires.

Luzzi, M. y Wilkis, A. (2019): *El dólar. Historia de una moneda argentina (1930-2019)*, Crítica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ruggeri, A., Antivero, J., Polti, N., Balaguer, E., Galeazzi, C., Gigliarelli, E., Halpin, M., Kammerath, A., Kogoi, M. A., Peláez, P., Sharpe, P., Srnc, C. (2018): “Las empresas recuperadas por los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri. Estado de situación a octubre de 2018”, Programa Facultad Abierta/Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

Ruggeri, A. (Coord.). (2016): “Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Estado de situación a mayo de 2016”, Programa Facultad Abierta/Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

Sassen, S. (2010): *Una sociología de la globalización*, Katz Editores, Buenos Aires.

Sennet, R. (2019): *Construir y habitar. Ética para la ciudad*, Editorial Anagrama, Barcelona.

Wilgis, A. (2018): “El poder de (e)valuar”, en *El poder de (e)valuar. La producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad contemporánea*, UNSAM EDITA; Editorial Universidad del Rosario, Buenos Aires.

Daiana Gimenez (8 de abril de 2019): *Contexto*, “Una empresa recuperada de La Plata debe 7 millones de luz y está al borde del cierre”. Recuperado de <https://www.diariocontexto.com.ar/2019/04/08/una-empresa-recuperada-de-la-plata-debe-7-millones-de-luz-y-esta-al-borde-del-cierre/>.

David Cufre (7 de julio de 2018): *Página12*, “Como moscas”. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/126773-como-moscas>.

La vaca (3 de diciembre de 2007), “Fábricas y empresas sin patrón: y siguen las firmas”. Recuperado de <http://www.lavaca.org/notas/fabricas-y-empresas-sin-patron-y-siguen-las-firmas/>.

Página12 (26 de junio de 2018): “Las nuevas recuperadas bajo el macrismo”. Entrevista a trabajadores de una empresa recuperada ubicada en La Paternal. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/124253-las-nuevas-recuperadas-bajo-el-macrismo>.

Carla Rebello (7 de junio de 2018): *C5N*, “La luz y el gas, por las nubes para las pymes”. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=tso2ny89UPQ>.

La inspección del trabajo: escenas del mundo laboral reciente

Maximiliano Ledesma

1- De la gestión de la crisis a la gestión del trabajo

Estos momentos históricos, que cabe de calificar de 'revolucionarios' están marcados por profundas modificaciones del mundo social. El desplazamiento de las pruebas acarrea unas transformaciones brutales de las condiciones sociales: mundos que se hundén, familias que se deshacen, profesiones que desaparecen, barrios que se vacían, gentes que se van, se suicidan, vienen a menos, pierden todos sus recursos, mientras que otros actores, que hasta el momento pasaban desapercibidos, consiguen triunfos fulgurantes. (Boltanski y Chiapello 2002, p. 630)

La Argentina de 2001 atravesaba un período de crisis asimilado al episodio de la Hiperinflación de 1989. El “quilombo” de esos años³⁴ se haría sentir en los conurbanos de las grandes ciudades (Bs. As, Rosario y Córdoba), donde residía gran parte de la población que veía su vida alterada por la destrucción de la industria local. El régimen de trabajo industrial era una de las principales víctimas del modelo consolidado en los “años de Menem”, reforzando las ideas en torno a la flexibilidad laboral, la subcontratación o la tercerización. Fueron los años donde las transformaciones del capitalismo comenzaron a profundizar la brecha de la desigualdad, porque a nuestro parecer, lo que fue generando el capitalismo desde entonces es una desigualdad desde adentro: desigualdad en los costos para vivir, desigualdad de ingresos y desigualdad en las posiciones de los grupos sociales³⁵. Por su parte, quienes debían abocarse a la defensa de los derechos vulnerados habían sido parte del desmantelamiento del

³⁴ Germán Perez (2013) indica que desde el lunfardo *quilombo* como etiqueta para pensar el 2001, podemos reflexionar no solo sobre lo sucedido en esas fechas, sino que funcionaba como un concepto intermedio para caracterizar el fin del período conocido como *transición democrática*. Corralito, blindaje, ajuste (y basándose en los pragmatistas) conformaban un lenguaje memorial que traía consigo la hiper del 89: saqueos, golpe institucional, pacto militar-sindical. De ese modo, el quilombo no fue *solamente* el 2001, sino que la totalidad del período abierto por la victoria electoral de Raúl Alfonsín en 1983 y que al mismo tiempo, reflejaba que la democracia destruía a su propio garante: el pueblo.

³⁵ Coincidimos con Roig (2015) en alejarnos de las nociones de “exclusión” e “inclusión” dado que no contemplan la multiplicidad de facetas que acarrear los procesos locales, y los conflictos de intereses entre diversos actores, que aparecen cuando se estudia a los integrados o excluidos, o se los asemeja con términos como “formalización” de los informales, que supondría una integración automática de los excluidos.

complejo de empresas industriales con fuerte vínculo al estado Nacional: muchos sindicalistas ganarían acciones en las empresas estatales privatizadas, es el caso de Lingieri de Obras Sanitarias, que quedaría a cargo de acciones que lo subieron al directorio de la empresa Aguas Argentinas, y Oscar Lezcano, que a través de su representante José Valle, quedaría a cargo de la dirección de Seguros de una de las tres empresas en la que se reintegra SEGBA (Segmentos Eléctricos Gran Buenos Aires), EDESUR –las dos restantes son EDENOR Y EDELAP-. En este contexto, los sindicatos que enfrentaron la política laboral menemista, y su plan económico de destrucción de la industria, fueron los que vieron fortalecer su número de afiliados y su zona de influencia: Hugo Moyano como dirigente de Camioneros, Juan Manuel Palacios de la UTA (unión de transportistas de Argentina) y Alicia Castro de los Aeronavegantes³⁶. Por su parte, la creciente desocupación que golpeaba a la población llevó a que varias organizaciones se agruparan en torno a su condición de desocupados y desocupadas: con diversa matriz ideológica (desde guevaristas hasta las mas nacional populares) y con lógica de movimiento social, la CCC (Corriente Clasista y Combativa) o el FTV (Federación Tierra y Vivienda), junto con el Bloque Piquetero Nacional (Organización Los pibes y el Movimiento de Trabajadores Desocupados) fueron protagonistas de los conflictos que tensionaban “el palacio” desde “la calle”, según narra el viejo libro de Miguel Bonasso (2002). Por último, la experiencia de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como el núcleo de gremios que se alejaban del “oficialismo menemista” que pregonaba la CGT con Menem, contuvo la demanda de gremios como los estatales golpeados por la reforma de estado que el presidente llevó a cabo, Germán Abdala y Víctor de Gennaro encabezaron la nueva confederación que no distinguió de filiaciones partidarias, encontrándose comunistas, peronistas, cristianos y hasta trotskistas. De la mano de CTERA (gremio docente) esta confederación enfrentó al menemismo en su objetivo de reformar el sistema educativo y el trabajo estatal. La CTA innovaría el campo político, reconociendo en su central al FTV, que de la mano del dirigente Luis D’lia: los trabajadores formales –de algún modo- se hermanaban con los desocupados informales.

³⁶ Estos nuevos representantes del mundo gremial, indicaban que la cantidad de afiliados de los sindicatos industriales disminuía, mientras que los afiliados a sindicatos vinculados a los servicios, como son el transporte, y la logística, aumentaban su representatividad.

La salida de la Convertibilidad³⁷, y el escenario con pésimos indicadores socio-laborales post estallido de 2001, fueron el punto culmine para que en el 2003, la tasa de empleo no registrado llegará al 44,8%. Empleos de mala calidad, contratos precarios y falta de aportes a la seguridad social, conformaron el combo que ponía a la informalidad laboral en agenda pública de modo urgente. Ahora bien, antes que asuma la presidencia Néstor Kirchner, la presidencia de Duhalde³⁸, estableció un paliativo a la creciente marginalidad que golpeaba en los deciles más bajos de la población: el Plan Jefes y Jefas del Hogar, por el cual se les otorgan 150 pesos mensuales a los jefes y jefas de familia que están desocupados. La creación del Programa Nacional de Registración laboral (PNRT) en agosto de 2003, parecía estar lejos ante esta situación.

Ante este escenario, se fue consolidando una población que no accedía a sus derechos laborales, (jubilación, indemnización, compensaciones específicas, obra social, seguro de trabajo, entre otras) y que sobrevivía a través del Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJH). La gestión de esta población en crisis dio paso a que en Agosto de 2003, el nuevo gobierno de Kirchner, y bajo la órbita del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, se creara el Programa Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). El objetivo de este programa era fortalecer y resucitar la inspección del trabajo para reducir la informalidad laboral, y así otorgar los derechos correspondientes a los trabajadores formalizados. Por otro lado, se buscaba aumentar los recursos fiscales para expandir la seguridad social, a los trabajadores empleados y desempleados.

³⁷ Modelo de paridad cambiaria que estableció 1 dólar 1 peso argentino. Planificado por el Ministro de Economía Domingo Cavallo, junto a Horacio Liendo (hijo) como presidente del Banco Central y Juan José Llach como Secretario de Programación Económica, la Convertibilidad permitió al país frenar la inflación y a su vez, creó la fantasía social de que podíamos vivir con dólares americanos. Para profundizar sobre este proceso véase Roig (2007).

³⁸ Luego de los estallidos del 19 y 20 de diciembre, y tras la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, la transición institucional fue asumida por las líneas sucesoras que establecía la Ley de Acefalía: Ramón Puerta como presidente del Senado; Adolfo Rodríguez Saá elegido por la Asamblea Legislativa; Eduardo Caamaño como presidente de la cámara de diputados y finalmente Eduardo Duhalde, elegido por una nueva Asamblea Legislativa. La presidencia de Duhalde se caracterizó por altos niveles de conflictividad social, llevando a que el 26 de Junio de 2002, la Policía Bonaerense asesinara a Maximiliano Kosteki y Dario Santillán en la estación de Avellaneda. Ambos eran militantes del MTD, y tras un corte del Puente Pueyrredón –que une una zona sur del Conurbano con la Capital Federal- donde reclamaban un aumento general del salario, una duplicación de 150 a 300 pesos, del monto de los subsidios para los desocupados, y más alimentos para los comedores populares. Tras este episodio, que blanqueó la impunidad policial y la displicencia política, la presidencia de Duhalde y la gestión económica del ministro Roberto Lavagna, impusieron una especie de orden y progreso para que en 2003 se adelanten las elecciones de Octubre a Abril. Duhalde impulsó a su candidato Néstor Kirchner (ex gobernador de Santa Cruz) para enfrentar a Carlos Menem, quien no accedería a competir en la segunda vuelta. Néstor Kirchner asume el 25 de mayo de 2003.

Por otra parte, la redención del trabajo, la gestión de este problema, conllevó que a lo largo de la presidencia de Kirchner, se reconvirtieran los programas pensados para tiempos de crisis: en 2006, por ejemplo, el PJJH pasaría con sus beneficiarios a componer el Plan Familias, donde las madres con hijos de menos de 18 años recibirán la prestación de 150 pesos y 25 pesos más por cada hijo o hija. Al mismo tiempo, se creaba el Seguro de Capacitación y Desempleo (SCD) donde los beneficiarios del PJJH pasaban a recibir 225 pesos mensuales pero debían asistir al menos una vez por semana a las recién creadas Oficinas de Empleo (OE) que el Ministerio de Trabajo de Nación instalaba en los municipios. Allí, recibirían programas de capacitación laboral o en su defecto, ofertas laborales. Las OE, al mismo tiempo, funcionaban como intermediarios laborales para las empresas zonales que iban en búsqueda de personal. Se consolidaba, entonces, la gestión del trabajo.

A partir de este escenario, nos detendremos en el PNRT y sus definiciones sobre el trabajo. Los funcionarios del Ministerio³⁹, pregonaban la idea de “desmercantilizar” el trabajo, proponiendo una visión “humanista” que recupere la noción de “trabajo digno” o el alcance de la dignidad mediante el trabajo⁴⁰. El modelo fue denominado por la dirigencia de entonces, “modelo de inclusión social basada en el trabajo”. Luego, cotejaremos las implicancias territoriales del programa y el tipo de funcionarios que se especializaron.

2- El PNRT contra el nuevo espíritu del capitalismo

La gestión de Carlos Tomada al frente del Ministerio, contempló atender las demandas de este arco de desocupados, ensanchando –de este modo- los colectivos laborales registrados, fortaleciendo la capacidad de acción, influencia, y atribuciones de los actores sindicales. A nuestro criterio, se trata de una confrontación con el *nuevo espíritu del capitalismo* que analizaron Boltanski y Chiapello (2002) y la podemos ver en el

³⁹ Prologo de Carlos Tomada (2013) a *Acciones y Resultados. La inspección del trabajo en la Argentina 2003-2012*. MTEySS. Bs. As. Ediciones Ministerio de Trabajo de Nación.

⁴⁰ La Organización Internacional del Trabajo define *trabajo decente* como el trabajo que en el mundo globalizado debería otorgar dignidad a quien lo realiza. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el dialogo social y el tripartismo. El PNRT se rige bajo esta filosofía

caso argentino⁴¹. Asumimos esta hipótesis por al menos dos dimensiones. La primera, basada en el estudio de Etchmندی (2013), el kirchnerismo realizó una alianza con los actores gremiales fomentando acciones a favor de los trabajadores (el PNRT sería una de tantas) y en detrimento de su desvalorización social que la crisis había hecho recaer en el trabajo. La segunda, es que los propios actores gremiales, específicamente a través de las seccionales zonales, ayudaron a expandir las funciones del Ministerio de Trabajo por diversas partes del Conurbano Bonaerense. Este proceso de “crítica”⁴² a la desprotección laboral y a la falta de derechos, se encaminó a reconstruir por “arriba” dignidad laboral, es decir asumiendo los preceptos internacionales para reducir la mercantilización del trabajo.

Ahora bien, esta crítica por arriba a las nociones mercantiles de trabajo, a nuestro entender contempla un proceso similar que se dio en la época, y que se expandió “por abajo”. La cuestión –desde nuestra óptica- pasa por comprender que los ataques contra el trabajo y sus trabajadores, no fueron arte de magia neoliberal: las periodizaciones de los procesos de acumulación de los últimos años del país dividen en 1976-2001, como el largo período neoliberal, mientras que 2001-2015, indica algo así como una “pausa neoliberal”, donde estado y sindicatos empoderan a los trabajadores mediante la dignidad. Según la lectura que hicimos de Karl Polanyi (2011) podemos pensar este proceso a largo plazo, enfatizando el papel de la fiscalización laboral en la desmercantilización del trabajo. Creemos, así, que la mercancía posee mecanismos para generar *principios de organización social*, en ese sentido, las instituciones de la sociedad y *la actuación de las personas* no deberían interferir en el despliegue de las *reglas del mercado*. Hay que mencionar, asimismo, que la mercancía tiene un carácter simbólico (representaciones, discursos, reglas morales, valores) que fomenta, esconde, habilita, bloquea y se contrapone a otros principios de organización social. Por ello, si la

⁴¹ El fenomenal estudio de las transformaciones del capitalismo que escribieron los autores franceses, nos lleva a pensar la noción de espíritu del capitalismo, con herencia weberiana (la adhesión de capitalistas y trabajadores por una cuestión valorativa), como “*la ideología que justifica el compromiso con el capitalismo*”. Los capitalistas no se adhieren solamente por su afán de ganancia, y los trabajadores no tienen como único objetivo “emplearse” y mantenerse en el sistema, sino que ambos recurren a argumentos en torno a las ventajas de seguir existiendo en el sistema capitalista, asumiendo los beneficios para cada colectivo. Este compromiso, explican, indica que el capitalismo genera márgenes de crítica, y en su capacidad para adaptarse a ellas, este asume una nueva configuración, al menos ideológica. El nuevo espíritu del capitalismo, entonces, hace referencia al capitalismo cognitivo, conexionista y cultural (en el sentido que adopta las críticas sobre la alienación y la despersonalización) que produjo el contenido teórico suficiente para desvalorizar el mundo laboral y sus actores.

⁴² Boltanski y Chiapello (op. cit) definen al menos tres tipos: una crítica que deslegitima el espíritu anterior; una que se construye en torno al “bien común” y busca la *justicia*; y por último, una crítica que tiende a confundir (las críticas que no tienen nada que decir sobre “lo nuevo”).

mercancía abarcará la totalidad de la vida social, no habría sociedad como tal o si el lenguaje económico nos conquistara, las referencias a la “ociosidad de la mano de obra” ocultarían la soberanía de los trabajadores afectados por tal situación. La fiscalización laboral funciona entre estas fronteras institucionales y simbólicas, dado que registra, mide, educa y castiga los abusos de estas lógicas de mercado. El problema se presenta cuando esta técnica de estado *re significa la alienación*, dado que *formalizar lo informal* también implica una lógica sistémica: el estado acomodaría a la persona trabajadora en otro status. En ese sentido, al disponer de la fuerza de trabajo de las personas, el sistema económico-administrativo cargaría, escribiría -basándonos en las ideas de Michel Foucault⁴³- e inscribiría sobre los cuerpos “la realidad social de un momento histórico”. De este modo, podemos afirmar que el estado, en la función de fiscalización laboral que estamos estudiando, y a través de los inspectores designados a tal efecto, sitúa intermitentemente a dueños de negocios en un régimen de comprensión y sanción social⁴⁴.

3- “Salir a la calle”: la burocracia plebeya de la inspección

Bien decíamos que el kirchnerismo fomentó una alianza con el sindicalismo; en el origen de esa alianza, se encuentra primero, los cambios acontecidos en la estructura productiva, que al igual que la emergencia y el reemplazo de gremios en los años 90, con el resurgimiento de la actividad industrial, pero fundamentalmente consolidando una infraestructura nacional de caminos para que las mercaderías y producciones sean transportadas por camiones, llevando a que el número de afiliados de ese gremio pasará de 100.000 a 200.000 del año a 2000 a 2010, según el ex secretario General de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano. El apoyo obrero, se plasmó con las dos

⁴³ Michel Foucault (2009) afirma que se puede leer en los cuerpos una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones de los objetos. Más allá de la sujeción que imprime ser “fuerza de trabajo”, se pueden leer los cuerpos, interpretarlos y ampliar el concepto de sujeción.

⁴⁴ La inspección del trabajo introdujo en 2013, a través de la Ley 26940, el REPSAL (registro de empleadores con sanciones laborales) a fin de “castigar” al empleador que infringe la ley repetidas veces. Se exponía en ese registro a quienes luego de una inspección no cumplían con el plazo de registración y así cargaba con una suspensión temporal de beneficios tipo subsidios, o rebajas fiscales que el estado otorgaba a las empresas. Esta fase punitiva del estado, o el imaginario clásico del estado contralor, no completa la imagen de la tarea inspectiva, porque como recalcamos es el funcionario quien suprime esa fase y se abre a la posibilidad argumental de re educar, aconsejar, explicar y comprender situaciones disímiles que presenta “la calle”. Es esta perspectiva que encarnan los inspectores, y que se convierte en un régimen con sus reglas, permisos y prohibiciones, la que nos interesa resaltar a la hora de pensar la recomposición de la dignidad “por abajo”.

centrales obreras, especialmente el grueso de la CGT, y la parte mayoritaria de la CTA, encabezada por CTERA, el gremio docente. Entonces, la hipótesis de Etchemendy es que el kirchnerismo selló una alianza con el sindicalismo que lo puso nuevamente como actor hegemónico en un escenario que transformó parte de la estructura económica⁴⁵. Asimismo, la CGT conservó una reserva institucional dentro del PJ, asumiendo una interlocución válida con los gobiernos kirchneristas, incluso llegando en 2010 a que su Secretario General, Hugo Moyano, fuera presidente del PJ bonaerense. Por último, es importante señalar, que tanto el ministro de trabajo Carlos Tomada, como la vice ministra Noemí Rial de todo el período kirchnerista (2003-2015), provenían de las filas de la CGT, ya que ambos desempeñaron la función de abogados de la central obrera a mediados de los 90.

En este contexto, los inspectores que salen a “la calle” no “barren” los comercios de los centros municipales, sino que siguen los parámetros de una burocracia muy particular que “piden zonas”⁴⁶, que atienden “denuncias” y que junto a los gremios zonales pregonan por la registración laboral. Funcionan como una *burocracia plebeya*⁴⁷. Por otra parte, y según la lectura que hicimos de Weber (2012) se puede pensar la fiscalización laboral, y su órbita de intervención, desde un punto de vista estrictamente sociológico, reduciendo los análisis economicistas y los que giran en torno a una cuestión legalista, o de *cumplimiento de la regla. Pensar sociológicamente este ámbito*

⁴⁵ Una arista institucional de esta hipótesis es que el kirchnerismo logró re crear ciertas instituciones baluarte en el desarrollo y fortaleza del sector trabajador: siempre con lógica tripartita (Estado, cámaras empresariales y sectores gremiales) el Comisión Nacional del Trabajo Agrario, Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Paritaria Nacional Docente. A su vez, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezó una política laboral que también generó nuevas instituciones: el PNRT, el RENATEA, y diversas políticas de empleo, formaron parte de una batería de políticas que el sindicalismo como actor y los trabajadores asalariados cultivaron a lo largo de doce años, y en cierto modo, les otorgó un colchón lo suficientemente grande para resistir la avanzada anti laboral del macrismo. Al mismo tiempo, tras el período de convertibilidad y el gobierno de la Alianza, la desindustrialización y las privatizaciones mermaron el poder gremial y de la clase trabajadora en su conjunto. Esta arista económica, se suma a una de carácter político: el afamado pasaje de la *fábrica al barrio* como locus donde los trabajadores desocupados reaccionaban a la pérdida de sus derechos. Recomendamos abordar el trabajo de Merklen (2005).

⁴⁶ Jerga con la que nominan, hablan y explican sus acciones los inspectores laborales.

⁴⁷ La “burocracia plebeya” indica una contradicción: promete proximidad y subvierte jerarquías por un lado, mientras que por otro genera un “efecto de distancia”. Perelmiter (2016) da tres características para hablar de esta burocracia. Primera, la capacidad que tiene esta burocracia de convertir acciones comunitarias en acciones sociales, es decir vía papeles diversos (formularios, memos, minutas, planillas, entre otras) que adoptan rango institucional. Segundo, la visión que tienen los beneficiarios respecto a la “resolución de problemas” que encarna esta burocracia. Y tercero, el hecho de que esta burocracia –como cualquier otra- *nomina*, es decir ressignifica y crea fronteras entre los que “reciben” la política pública. Siguiendo la propuesta de la autora, podemos notar como el gobierno de la ciudad utiliza a esta burocracia plebeya, es decir diversos profesionales que re ensamblan la villa para integrarla a la ciudad, haciendo que el trabajo sucede en el territorio.

de acción, es considerar que la actividad humana se guía con *principios paradójales*, y a veces, contrapuestos entre sí. En este tipo de acciones de estado, los actores involucrados, patrones, trabajadores e inspectores, pueden guiar su accionar por estos principios contrapuestos, y además en el desarrollo de cada actividad, pueden contradecir su anterior accionar. De este modo, si se llegará a la pura omisión o la *impugnación del significado* de los principios, convirtiéndose este proceso en normativa general, se induce que la relevancia de aquellos principios pierde la fuerza que lo hace perdurar como guía. Por ello, la fiscalización laboral, no puede pensarse asumiendo un único *punto de vista* (legal, económico, o como razón de estado), por el contrario, debemos hacer el esfuerzo por describir *la convivencia de los principios contrapuestos* de los actores y la posibilidad concreta de que tengan una guía multiforme de conductas.

El mapa general que aquí presentamos sobre la inspección laboral, tienen impulso en pensar las dinámicas generales que nos están atravesando, y que si bien se localizan temporalmente en el período gobernado por los Kirchner, eso no quita que la gestión del trabajo haya olvidado pensar otras dinámicas posibles, otros paradigmas de integración laboral y otro modo de evaluar las políticas públicas.

4- Una conclusión política

Bajo el capitalismo, la única cosa peor que estar explotado es no estar explotado. Desde los comienzos de la economía del trabajo asalariado, la vida sin salario ha sido una calamidad para aquellos desposeídos de tierra, de herramientas y de medios de subsistencia. (Michael Denning 2011, p. 1)

Parafraseando a Emilio de Ipola (1997), acerca del surgimiento de la sociología como hecho que denunciaba la desaparición de los lazos sociales, nos preguntamos ¿es la desaparición del Ministerio de Trabajo un indicio de que las relaciones laborales

formales y protegidas pierden potencia en nuestra sociedad? Desde⁴⁸ septiembre de 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dejó su rango ministerial y pasó a la órbita del Ministerio de Producción como Secretaría de Trabajo (Ministerio de Producción y Trabajo). Si bien la sociología es un hecho científico, y la reconversión ministerial deriva de luchas políticas, este accionar gubernamental nos retrata por un lado la importancia de las instituciones para regular el conflicto laboral y por otro, los cambios en el mundo laboral⁴⁹. Podemos afirmar, entonces, que desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, la cuestión laboral en la agenda pública (medios gráficos, revistas digitales como *Anfibia*, *Panamá*, *Tercer Cordón* o *Crisis*), y legislativa, sumado al clásico lobby anti *costo laboral* del empresariado, ha sufrido alteraciones que pensamos en dos dimensiones. La primera de ellas, es sobre la asalarización del trabajo, es decir la alteración del estatuto, los derechos, la afiliación social que generaba pertenecer a una relación laboral regulada, protegida y mediada por el estado, para así contrarrestar la asimetría de poder con el empleador⁵⁰. La otra, el

⁴⁸ A cuatro años del gobierno de Macri, la avanzada contra el derecho laboral también se desplegó en el plano judicial. En primer lugar, el fuero laboral fue colonizado por jueces afines al gobierno; en segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia tuvo fallos en contra del derecho colectivo luego de una década de sentencias progresivas. El desaparecido Ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca, generó diversos dispositivos administrativos (resoluciones, comunicados, decretos) en los cuales avaló la persecución a dirigentes (algunos de ellos con frondosos prontuarios), la intervención a gremios y la anulación de los procesos electorarios. Un caso paradigmático es la persecución que tuvieron los metrodelegados: si bien el reconocimiento jurídico llegó a finales de la gestión de Carlos Tomada, la actual gestión anuló dicho reconocimiento, anulando la cuenta bancaria del gremio, deteniendo a quienes encabezaban huelgas y obviamente reprimiendo. Entre las intervenciones a gremios, la del gremio canillitas y el Sindicato de Judiciales de la Provincia de Mendoza se encuentran entre las más resonantes.

⁴⁹ Según el último informe del INDEC de septiembre de 2018, se registró una disminución de 0,2 puntos porcentuales en la actividad asalariada con aporte jubilatorio, mientras que aumentó 0,4 la categoría cuenta propia. Otro dato que nos interesa de ese informe, es que en los partidos del AMBA, la desocupación rondaría el 11,4 %. Los datos corresponden a la comparación del primer trimestre de 2018 con los del mismo período para 2017. Por otra parte, según datos de SIPA (Sistema de Integrado Previsional Argentino) hay 12 millones de trabajadores registrados en todo el país. Asimismo, el Observatorio de Empleo, Producción, y Comercio Exterior (ODEP), perteneciente a la UMET, afirma que la informalidad laboral en el país es de 34,3 para el segundo trimestre de 2018. Según el informe, basado en los boletines oficiales de Encuestas e indicadores laborales de la secretaria de trabajo de Nación, la conclusión de los indicadores del mercado de trabajo, es que el gobierno de Macri fomenta un modelo de precarización laboral, que incluye el aumento del trabajo no registrado, la pérdida de derechos laborales, la subcalificación de los empleos y la disminución del poder adquisitivo del salario. Fuentes: Reporte del Trabajo no registrado (EIL) octubre 2018. EPH INDEC, Segundo trimestre 2018. Informe ODEP octubre de 2018. Todas las versiones se encuentran en la WEB

⁵⁰ Cuando utilizamos estas nociones, lo hacemos pensando directamente en el trabajo de Robert Castel. Vale hacer la aclaración –aunque debería ser obvio– que el relato, la historia, y la genealogía de la sociedad salarial que escribe el célebre autor francés no es ciento por ciento extrapolable a la realidad argentina. Como bien señalan Kessler y Merklen (2013) la idea no es ver Argentina desde Francia ni viceversa, sino encontrar diálogos fructíferos entre tradiciones de pensamiento que ofrezcan mayor conocimiento de los fenómenos sociales. Asimismo, Merklen (2018) ha revisado la quema de bibliotecas en París, no solo con estadía allí, sino reconectando su biografía teórica y vivencia personal, con acontecimientos que se sucedieron en las periferias porteñas. Creo, que este tipo de ejercicios son los que

avance de nuevas formas laborales, que con el nombre de *emprendedurismo y economía popular* asignan nuevas conflictividades y ponen en cuestionamiento los parámetros de la integración social vía el derecho al trabajo.

Bibliografía

Boltanski, Luc y Chiapello, Eve (2002) *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid. Akal

Bonnaso, Miguel (2002) *El palacio y la calle. Crónicas de insurgentes y conspiradores*. Bs. As. Planeta

Castel, Robert. (1995) *Metamorfosis de la cuestión social*. Bs. As. Paidós

De Ipola, Emilio (1997) *Las cosas del creer. Creencia, lazo social y comunidad política*. Bs. As. Ariel.

Denning, M. (2011): “Vida sin salario”, en *New LeftReview*66: 77-94.

Etchemendy, Sebastian (2013) *La doble alianza gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012). Orígenes, evidencia y perspectivas*. En Acuña, Carlos (comp.) *¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, estado y actores en la política argentina*. Bs. As. S XXI.

Foucault, Michel (2009) *Vigilar y castigar*. Bs. As. S XXI.

Merklen, Denis (2005) *Pobres Ciudadanos*. Bs. As. Gorla Ed.

- (2018) *Bibliotecas en llamas*. Los Polvorines. Unga ediciones.

Kessler, Gabriel y Merklen, Denis (2013) *Una introducción cruzando el Atlántico*. En *Individuación, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?* Robert Castel, Gabriel Kessler, Denis Merklen y Numa Murard. Bs. As. Paidós.

Pereyra S, Vommaro G, y Perez G. (2013) *La Grieta. Política, cultura y economía después de 2001*. Bs. As. Biblos.

Polanyi, Karl (2011) *La gran transformación*. Bs. As. FCE.

nos permiten potenciar nuestras indagaciones, y que sin considerarme parte de estos enormes autores, recojo el guante de *pensar sociológicamente* nuestra experiencia laboral-vital.

Roig, Alexadre (2007) *Discurso y moneda en la creación de la convertibilidad*.
<https://es.scribd.com/document/288498109/ROIG-Discurso-y-Moneda-en-La-Creacion-de-La-Convertibilidad>

- (2015) *Financierización y derechos de los trabajadores de la economía popular* disponible en http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Financiarizacion%20y%20derechos%20BOLL.pdf

Weber, Max (2012) *Economía y Sociedad*. Bs. As. FCE.

Fuentes

<https://revistacrisis.com.ar/notas/el-arte-de-la-guerra-burocratica>

<http://tercercordon.com.ar/rap-del-exilio/>

<http://panamarevista.com/el-hombremujer-fabrica-cronica-de-una-explotacion-anunciada/>

<http://revistaanfibia.com/ensayo/las-formas-politicas-del-trabajo/>

INDEC

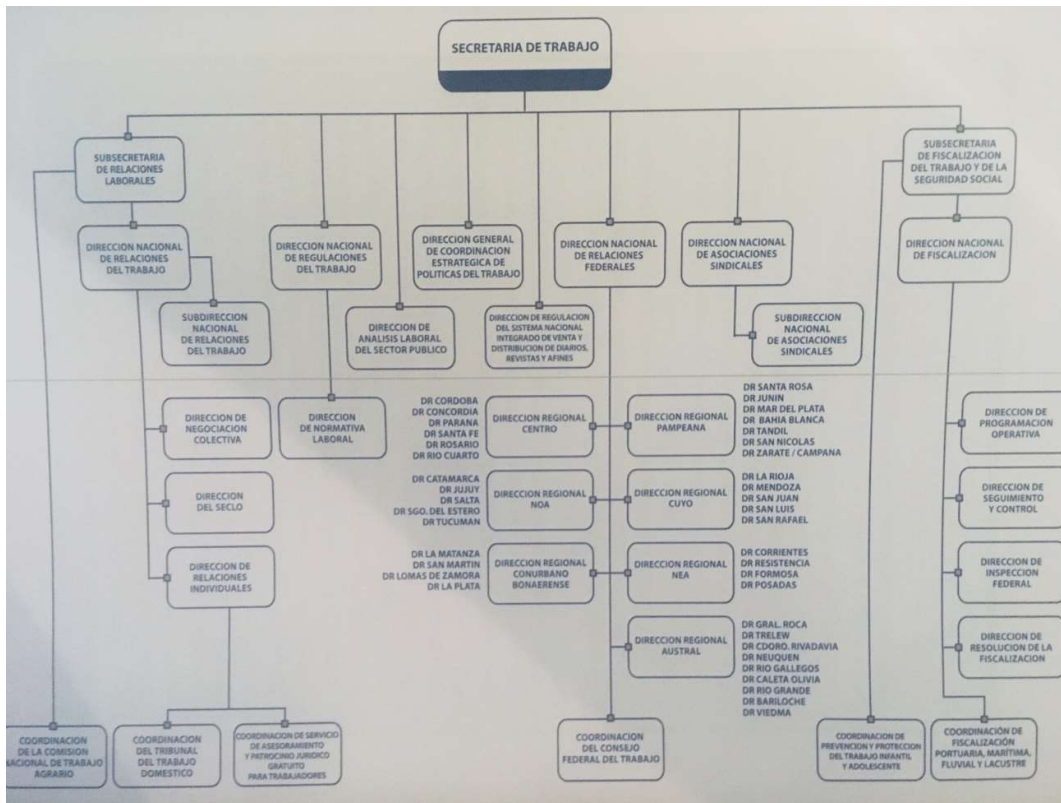
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim18.pdf

UMET-ODEP

<http://umet.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/Observatorio-Versi%C3%B3n-Final-Oct17.pdf>

Acciones y Resultados. La inspección del trabajo en la Argentina 2003-2012. MTEySS

Organigrama de la Secretaria de Trabajo. MTEySS.



Nota: El organigrama de la Secretaria de Trabajo de 2003 a 2015. Las direcciones regionales dependientes de la Dirección Nacional de Relaciones Federales, demuestra que la territorialidad ministerial fue una prioridad de la gestión anterior, y esto se suma a la política de convivencia con las CGT zonales. Por ejemplo, la DR de Matanza fue creada en 2006, y la DR de San Nicolás en 2012. Los inspectores tienen jurisprudencia nacional, pero la Delegación Matanza tiene límites al Oeste (Chivilcoy), al Norte (Tres de Febrero) y al Sur (Lomas de Zamora).